



ari

El regreso de Libia: entre el cambio y el continuismo

Libia ha recorrido un largo camino hacia su rehabilitación internacional durante los tres últimos años. Las reformas realizadas se han centrado en el ámbito económico y no cabe esperar que vayan acompañadas de una significativa liberalización política.

Haizam Amirah Fernández

Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa

El alto el fuego de la organización terrorista ETA ha dado lugar a un nuevo escenario que, a pesar de las optimistas valoraciones que lógicamente suscita, continúa planteando importantes desafíos para el Estado español.

Rogelio Alonso

El gas: una cuestión conflictiva en América Latina

La cuestión de la energía –particularmente el gas– se ha complicado recientemente en América Latina, poniendo en entredicho tanto la seguridad energética de la zona como los intereses de España.

Paul Isbell

Apunte sobre la campaña electoral mexicana de 2006

La campaña electoral mexicana ha sido inusualmente agresiva, con momentos de tensión, y su resultado es imposible de pronosticar a poco más de un mes de la elección.

Fernando Escalante Gonzalbo

Real Instituto Elcano

El Real Instituto Elcano es una fundación privada, independiente de la administración pública y de las empresas que mayoritariamente la financian. Se constituyó, bajo la Presidencia de Honor de S.A.R. el Príncipe de Asturias, el 27 de diciembre de 2001, con una tarea fundamental: realizar un estudio exhaustivo de los intereses de España y de los españoles en la sociedad internacional, para ponerlo al servicio de la comunidad.

Desde su nacimiento, el Instituto se define como una institución apartidista aunque no neutral, ya que busca hacer posibles los valores que la inspiran; que mediante métodos y aproximaciones científicas multidisciplinarias, trata de desarrollar una perspectiva estratégica y global, con vocación prospectiva, con el fin de generar propuestas políticas y sociales que puedan ser aplicadas en la práctica.

La misión esencial del Real Instituto Elcano es servir de foco de pensamiento y de generación de ideas que resulten útiles para los responsables políticos, los dirigentes de las instituciones públicas y privadas interesadas y la formación de la opinión pública. Esta tarea se basa en un compromiso de sus miembros con unos valores compartidos:

- la consecución de la paz en las relaciones internacionales
- la cooperación económica y la solidaridad entre los Estados y los pueblos
- el respeto a los derechos humanos
- la promoción de procesos de transición y consolidación de las democracias y de los valores democráticos
- la concordia o al menos la tolerancia, entre Estados, pueblos, y, eventualmente, civilizaciones

La misión del Real Instituto Elcano supone un punto de partida desde el que desarrollar los siguientes objetivos:

- analizar el escenario internacional, con el fin de elaborar y producir análisis, estudios e informes con los que contribuir a la toma de decisiones
- difundir esos estudios y análisis, con la meta de conformar y participar en el debate público y social, tanto nacional como global
- servir de foro de encuentro y debate, garantizando así una mayor y mejor comunicación entre agentes públicos y privados en el ámbito de las relaciones internacionales y de seguridad
- aglutinar a su alrededor los programas, proyectos e ideas de la comunidad estratégica española y, en la medida de lo posible, de la internacional



El regreso de Libia: entre el cambio y el continuismo*Haizam Amirah Fernández*

Libia ha recorrido un largo camino hacia su rehabilitación internacional durante los tres últimos años. Las reformas realizadas hasta el momento se han centrado en el ámbito económico y no cabe esperar que vayan acompañadas de una significativa liberalización política.

4

Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa*Rogelio Alonso*

Es pertinente exponer los errores que se han cometido en el contexto de Irlanda del Norte con el fin de evitar su réplica en nuestro propio país, particularmente cuando se insiste en tomar como modelo dicho referente estableciéndose a menudo el paralelismo entre ambos escenarios con escaso rigor y desde la tergiversación.

10

El gas: una cuestión conflictiva en América Latina*Paul Isbell*

Se analizan los cambios y retos más importantes del panorama energético latinoamericano, poniendo un énfasis especial en el tema del gas.

16

Apunte sobre la campaña electoral mexicana de 2006*Fernando Escalante Gonzalbo*

La campaña electoral mexicana ha sido inusualmente agresiva, con momentos de tensión, y su resultado es imposible de pronosticar a poco más de un mes de la elección. Podría ganar tanto el candidato del PAN como el del PRD

21

Documentos de trabajo y libros publicados**ARI y Materiales de Interés****Actividades realizadas en mayo****Próximas Actividades****26**

Editor: Real Instituto Elcano
Coordinadoras: Carola García-Calvo y
Pilar Tena
ISSN 1696-3466
Depósito Legal: M.23.689-2003

Real Instituto Elcano
c/. Príncipe de Vergara, 51
28006 Madrid
Teléfono: 91 781 67 70
Fax: 91 426 21 57
E-mail: info@r-i-elcano.org

El regreso de Libia: entre el cambio y el continuismo

Las reformas realizadas hasta el momento en el país magrebí han sido limitadas y se han centrado en el ámbito económico, con el objetivo de atraer mayores inversiones extranjeras directas. Sin embargo, aún existen varios obstáculos de cara a la normalización plena de las relaciones de Libia con el exterior. Esos obstáculos están ligados a la naturaleza del régimen y a la desconfianza mutua que generó el período de aislamiento.

Haizam Amirah Fernández

Tema

Libia ha recorrido un largo camino hacia su rehabilitación internacional durante los tres últimos años. Las reformas realizadas hasta el momento han sido limitadas y se han centrado en el ámbito económico, con el objetivo de atraer mayores inversiones extranjeras directas, sobre todo en el sector del petróleo. No cabe esperar que dichas reformas vayan acompañadas de una significativa liberalización política.

Resumen

Libia ha recorrido un largo camino hacia su rehabilitación internacional durante los tres últimos años. Pocos habrían predicho a principios de 2003 los cambios que se avecinaban: la resolución de los principales litigios internacionales que afectaban a Libia, incluido el caso Lockerbie; el levantamiento de las sanciones impuestas por Naciones Unidas en 1992 y 1993, ocurrido en septiembre de 2003; el anuncio libio, tres meses después, del abandono de sus programas de armas de destrucción masiva; el posterior levantamiento progresivo por parte de EEUU de sus sanciones bilaterales, incluidas las comerciales, diplomáticas y militares; y la decisión del Consejo Europeo, en octubre de 2004, de levantar todas sus sanciones económicas, además del embargo de armas que decretó 18 años antes. Este proceso de rehabilitación se ha producido de forma lineal y sin grandes sobresaltos, algo que no siempre ha sido la norma en las relaciones de Libia con el exterior.

Análisis

La transformación meteórica de Libia, tras largos años de conflictos y desconfianza con los países occidentales, se ha traducido en una intensa actividad a varios niveles. A lo largo de 2004, el coronel Muammar el Gaddafi recibió la visita de varios líderes europeos (Tony Blair, Silvio Berlusconi, Gerhard Schröder y Jacques Chirac) con el propósito de intensificar las relaciones diplomáticas y, sobre todo, económicas. El propio Gaddafi visitó Bruselas en abril de ese mismo año, en lo que supuso su reconocimiento definitivo como líder creíble, al que se le perdonaban los excesos y políticas erráticas del pasado. Las oportunidades económicas y comerciales que hoy ofrece Libia, tras años de sanciones y con abundantes ingresos de hidrocarburos, son amplias y poseen un gran potencial lucrativo.

Las reformas realizadas hasta el momento en el país magrebí han sido limitadas y se han centrado en el ámbito económico, con el objetivo de atraer mayores inversiones extranjeras directas. Sin embargo, aún existen varios obstáculos de cara a la normalización plena de las relaciones de Libia con el exterior. Esos obstáculos están ligados a la naturaleza del régimen y a la desconfianza mutua que generó el período de aislamiento. Cabe preguntarse qué cambios se han producido en el interior del país, y si éstos son suficientes para abordar los enormes retos a los que se enfrentan la economía y la sociedad libias. Solamente un nuevo clima de cooperación, que no se limite a aspectos económicos y de seguridad, puede garantizar el desarrollo del potencial constructivo de Libia, tanto dentro como fuera de sus fronteras.¹

Nuevo papel de Libia en el mundo

Las decisiones del líder libio de resolver los contenciosos pendientes con los grandes países occidentales y dismantelar sus programas de armas no convencionales se produjeron a los pocos meses del cambio de régimen en Irak, tras la invasión del país liderada por EEUU. Los pasos dados por Gaddafi fueron interpretados como una medida preventiva para que su régimen no corriera la misma suerte que el de Sadam Husein. En esos momentos, a la Administración estadounidense le interesaba presentar la transformación de Libia como un ejemplo de la validez de su doctrina de guerra preventiva. Sin embargo, a pesar de la influencia que la política de Washington pudiera tener, Trípoli ya venía mostrando una actitud conciliadora hacia Occidente y había realizado con anterioridad intentos de normalizar sus relaciones con EEUU y la UE, varios años antes de la llegada de George W. Bush al poder.²

En un informe de 1998, el Departamento de Estado estadounidense reconocía que “Libia no ha

¹ Michele Dunne, “Libya: Security is Not Enough”, *Carnegie Policy Brief*, n° 32, octubre de 2004.

² Ronald Bruce St John, “Libya is Not Iraq: Preemptive Strikes, WMD and Diplomacy”, *Middle East Journal*, vol. 58, n° 3, verano de 2004.

estado implicada en ningún acto de terrorismo internacional durante varios años". Gaddafi condenó rápidamente los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington, y declaró que EEUU estaba en su pleno derecho de emprender represalias contra quienes los cometieron. El terrorismo yihadí también representa una amenaza para el régimen libio, que ha participado de forma activa en su erradicación. Los servicios de inteligencia libios han facilitado a los estadounidenses y británicos abundante información sobre al-Qaeda y otros grupos integristas con implantación en el mundo islámico. De hecho, la primera orden de captura internacional contra Osama bin Laden fue emitida por Libia en marzo de 1998, dos años antes de que EEUU lo hiciera.

La colaboración de Libia con EEUU ha producido un giro radical en sus relaciones. El pasado 15 de mayo, la Administración estadounidense anunció que retiraba a Libia de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo y restablecía relaciones diplomáticas plenas con Trípoli, con el intercambio de embajadores. Esta decisión, tomada tras más de 25 años de ruptura, abre el camino a una posible visita de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a la *yamahiriya*. Cabe señalar que éste es el primer caso de un Estado que es retirado de la lista estadounidense de patrocinadores del terrorismo sin que se haya producido un cambio de régimen o dicho Estado haya dejado de existir.

Libia ha dado un giro a su política exterior durante los últimos años, apostando por estrechar lazos con África, en detrimento de las relaciones con el resto de países árabes, y desvinculándose en buena medida del conflicto árabe-israelí. Trípoli se ha presentado como uno de los mayores impulsores de la Unión Africana (UA) desde su creación en julio de 2002 como heredera de la Organización para la Unidad Africana (OUA), y ha prestado su mediación en conflictos como el de Darfur, en Sudán. Asimismo, aunque Gaddafi condenó la ocupación militar de Iraq, su postura fue bastante más tibia de lo que se hubiese esperado de él en otros tiempos. De esta forma, el coronel pretende adquirir mayor protagonismo y mejorar su imagen exterior, presentándose como un elemento conciliador en el convulso escenario internacional.³

Lo primero... la economía

La economía libia depende casi exclusivamente de los hidrocarburos. La mejora de las rentas petroleras de los últimos años debido al aumento de los precios hace que Libia tenga la liquidez suficiente (según el Fondo Monetario Internacional, las reservas en divisas superarán los 56.000 millones de dólares a finales de 2006),⁴ lo que le permite aplicar una amplia gama de

políticas económicas a fin de incentivar la llegada de empresas extranjeras. La Compañía Nacional de Petróleo (NOC, en sus siglas en inglés) ingresa cerca del 95% del total de divisas que recibe el país. Libia es el segundo mayor productor de crudo de África, con una producción actual estimada en 1,65 millones de barriles diarios (cantidad muy por debajo de los 3,2 millones de barriles diarios que producía a principios de la década de 1970). Además, posee unas reservas comprobadas de crudo de más de 39.000 millones de barriles, lo que equivale al 40% del total de las reservas comprobadas de África.

La colaboración de Libia con EEUU ha producido un giro radical en sus relaciones. El pasado 15 de mayo, la Administración estadounidense anunció que retiraba a Libia de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo y restablecía relaciones diplomáticas plenas con Trípoli, con el intercambio de embajadores. Esta decisión, tomada tras más de 25 años de ruptura, abre el camino a una posible visita de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, a la yamahiriya

Tradicionalmente, el sector petrolero libio se ha gestionado de una forma autónoma y más bien eficaz. En la actualidad, Libia necesita atraer grandes inversiones en dicho sector, que resulta vital en una economía que por el momento no logra diversificar sus fuentes de ingresos. De hecho, la propia supervivencia del régimen podría depender de su capacidad de producir más crudo y gas. El Gobierno espera aumentar su producción de petróleo hasta los 3 millones de barriles diarios de aquí a 2015. Para que eso ocurra, se estima que Libia debe atraer más de 30.000 millones de dólares en inversiones y tecnología moderna, con el fin de superar los efectos negativos de más de dos décadas de embargos y sanciones.⁵

El ritmo de concesión de licencias de exploración y producción se ha acelerado en los dos últimos años, al mismo tiempo que crecía la competencia entre las empresas petroleras internacionales para obtener las concesiones ofrecidas por la NOC. Las dos últimas subastas de licencias se han realizado de forma transparente y en ellas se han otorgado derechos de exploración y producción a petroleras estadounidenses (ExxonMobil, ChevronTexaco y las empresas del Oasis Group) y de otras nacionalidades, principalmente europeas y asiáticas.⁶

Con anterioridad, las autoridades libias ya habían mostrado su interés en el retorno de las petroleras

³ Véase un análisis anterior sobre estos asuntos en: Haizam Amirah Fernández, "La rehabilitación de Libia: más allá de Lockerbie", *Análisis del Real Instituto Elcano*, n° 108, 18 de septiembre de 2003 (www.realinstitutoelcano.org/analisis/333.asp)

⁴ FMI, *Country Report*, n° 06/136, abril de 2006.

⁵ *Economist Intelligence Unit*, "Libya: Country Report", enero de 2006.

⁶ Selwa Calderbank, "At Last, a Real Energy Sector Strategy for Qadhafi's Revived Hydrocarbons Oasis", *African Energy*, n° 94, enero de 2006.

estadounidenses, que tuvieron una presencia importante en el país hasta que la Administración de Ronald Reagan les ordenó abandonarlo en 1986, y que aún así conservaban sus concesiones en territorio del país magrebí. En la ronda de concesión de licencias de octubre de 2005, algunos países –como China, la India, Indonesia y Japón– conseguían entrar por primera vez en el mercado libio, al haber ofrecido condiciones sumamente competitivas, en lo que algunos calificaron como un “canon de entrada”.

El Gobierno espera aumentar su producción de petróleo hasta los 3 millones de barriles diarios de aquí a 2015. Para que eso ocurra, se estima que Libia debe atraer más de 30.000 millones de dólares en inversiones y tecnología moderna, con el fin de superar los efectos negativos de más de dos décadas de embargos y sanciones

La creciente afluencia de empresarios a Libia no se está traduciendo en un incremento notable de las oportunidades para cerrar nuevos acuerdos. Según un influyente diplomático europeo en Trípoli, “ninguno de los grandes contratos que las compañías [de su país] han intentado lograr se ha acabado firmando, a pesar de la cuidadosa preparación, intensas negociaciones y fuertes muestras de apoyo”. Este fenómeno se produce como consecuencia del bajo gasto público de los gobiernos central y locales, a pesar de contar con elevados ingresos. Una explicación podría ser la existencia de grandes incertidumbres y desacuerdos entre las elites libias sobre cómo se debe proceder. Otra posibilidad es que las autoridades libias estén esperando la llegada de un mayor número de empresas estadounidenses, así como el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Washington, para así poder beneficiarse de una mayor competencia entre los países que deseen hacer negocios, bien sea entre EEUU y la UE, entre los propios países europeos o incluso entre los asiáticos (el ex presidente de China, Jiang Zemin, realizó una visita oficial a Libia en 2002). Para tal fin, Trípoli solicitó en 2004 la entrada en la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Situación interna

A pesar de no tener ningún cargo oficial, más allá de ser el líder de la revolución de al-Fateh, el coronel Gaddafi sigue llevando las riendas del país tras más de 36 años en el poder. El sistema de la *yamahiriya* (república de masas), creado por él de acuerdo con la “tercera teoría universal” expuesta en su Libro Verde, le

permite controlar todo el sistema político y evitar el surgimiento de cualquier otro centro de poder, por modesto que sea. Todos los cambios introducidos en el sistema han tenido como objetivo consolidar su autoridad. Cabe destacar que no existe un mecanismo claro para su sucesión y, de continuar así, es de prever que la era post Gaddafi se inicie con una lucha por el poder entre diversos grupos con intereses socioeconómicos y políticos enfrentados.

El nombramiento, en junio de 2003, de Shukri Ghanem como primer ministro se interpretó como un triunfo de la línea reformista del régimen. Ghanem, un tecnócrata liberal defensor de la economía de mercado, se convirtió en el abanderado de las reformas económicas, como la privatización de algunas empresas públicas y reducción de las subvenciones estatales, así como de una mayor transparencia del sistema político. La decisión de nombrarlo primer ministro mejoró la imagen de Libia, en un momento en que el régimen buscaba el reconocimiento internacional. Sin embargo, numerosas iniciativas reformistas propuestas por Ghanem fueron torpedeadas por el ala dura del régimen, concretamente por los influyentes comités revolucionarios y su hombre fuerte, Ahmed Ibrahim, quien se ve a sí mismo como heredero de la línea ideológica revolucionaria y sucesor del líder.

La decisión de Gaddafi, a principios del pasado marzo, de reemplazar a Ghanem por un nuevo primer ministro, Baghdadi Mahmudi, menos entusiasta de las reformas, representa una victoria de la *vieja guardia* y defensores del *sui generis* y desacreditado sistema de “poder popular” frente a los sectores más pragmáticos.⁷ Dicho cambio también podría representar un reposicionamiento de los candidatos a suceder a Gaddafi (de 64 años de edad), que implicaría una pérdida de influencia de su hijo Saif al-Islam, más partidario de introducir ciertas reformas en el sistema, quien hasta hace poco parecía el candidato oficioso a la sucesión.

En junio de 2003, Gaddafi defendió ante el Congreso General del Pueblo la eliminación del enorme e hipertrofiado sector público, así como el inicio de un amplio proceso de privatizaciones. Esas declaraciones despertaron gran interés fuera de Libia, aunque hasta el momento no se han traducido en medidas concretas y tan sólo se ha privatizado un pequeño número de empresas. El reconocimiento de la necesidad de privatizar (“ampliar la base de propiedad”, en el lenguaje oficial) lleva implícito el reconocimiento del fracaso del modelo económico establecido en la década de 1970, así como la insuficiencia de las reformas emprendidas a partir de 1987. Al mismo tiempo, la abolición de una de las máximas contenidas en el Libro Verde, por la que se considera a los trabajadores como

⁷ “Kaddafi’s Security, Continuity and Reform Agenda: Why Ghanem Was Removed from Prime Ministry”, *The North Africa Journal*, n° 183, 23 de marzo de 2006.

“socios y no asalariados”, abre las puertas a que otras máximas revolucionarias también puedan ser alteradas.

Relaciones con la UE

A pesar de la conversión de Libia en los últimos años, su relación con la UE sigue siendo anómala. Entre Trípoli y Bruselas existen numerosos asuntos de interés mutuo, como son las relaciones comerciales, la inmigración, la lucha contra el terrorismo, las telecomunicaciones, el transporte, los servicios sanitarios y educativos, los servicios financieros, las reformas legislativas, el turismo, la agricultura y pesca, las infraestructuras, la protección del medio ambiente, etc. Varios países europeos mantienen estrechas relaciones comerciales con Libia, siendo éstos sus principales socios. No obstante, Libia es el único país del Mediterráneo que no tiene relaciones formales con la UE, ya que, entre otras cosas, la Comisión Europea no mantiene una delegación permanente en Trípoli (aunque desde mayo de 2005 cuenta con un representante no permanente).

A día de hoy, Libia posee el estatus de país observador en la Asociación Euromediterránea (AEM o Proceso de Barcelona), y como tal está presente en los diálogos políticos de alto nivel. Ya en 2004 Libia declaró su interés en integrarse plenamente en la AEM, aunque hasta el momento no ha cursado una solicitud formal. Junto con Siria, Libia es el *eslabón perdido* en el proyecto de la UE de crear un área euromediterránea de libre comercio para 2010. Las razones que las autoridades libias esgrimen para justificar su ausencia es que su país no estuvo presente en la redacción de la Declaración de Barcelona en 1995, ya que sobre él pesaban sanciones internacionales. También, que no pueden participar en una iniciativa cuyo objetivo final es “la creación de una zona de paz, estabilidad y seguridad en el Mediterráneo” mientras un miembro siga ocupando los territorios de otro (en referencia a la ocupación israelí de los territorios palestinos). En realidad, Libia sabe que puede conseguir de forma bilateral gran parte de lo que necesita de Europa sin tener que comprometerse a aceptar el acervo de Barcelona.

Las recientes visitas de los principales líderes europeos a Trípoli se produjeron cuando Libia aun no era miembro de la AEM ni había firmado un acuerdo de asociación, como lo han hecho casi todos los países del sur del Mediterráneo. La línea adoptada por la Comisión Europea de emplear una estrategia de acercamiento realista, condicional y progresivo con Libia, aunque pueda resultar necesaria en las condiciones actuales, corre el riesgo de ofrecer a Trípoli una versión de la AEM *a la carta*. En algunos círculos europeos se cree que la participación activa de Libia en el Grupo 5+5 (que incluye a los cinco países del Magreb –Argelia, Libia, Marruecos,

Mauritania y Túnez– y a cinco europeos –España, Francia, Italia, Malta y Portugal–) sirve para que se incorpore al diálogo político de forma gradual, como paso previo a su integración plena en la AEM. Sin embargo, desde la Comisión Europea se recuerda que la UE tiene 25 países miembros. Por su parte, Libia continúa favoreciendo el marco del Grupo 5+5, e incluso su ampliación para incluir tanto a Egipto como a Grecia.⁸

En la práctica, Libia ya disfruta de las ventajas que ofrecería un área de libre comercio con la UE, puesto que sus exportaciones de energía no están sometidas a aranceles. Si el objetivo final de la UE es la integración plena de Libia en la AEM, tendrá

En la práctica, Libia ya disfruta de las ventajas que ofrecería un área de libre comercio con la UE, puesto que sus exportaciones de energía no están sometidas a aranceles. Si el objetivo final de la UE es la integración plena de Libia en la AEM, tendrá que ofrecerle incentivos relacionados con el acceso a la asistencia técnica europea, así como la posibilidad de participar en proyectos de infraestructuras regionales o en proyectos conjuntos de apoyo al desarrollo en África

que ofrecerle incentivos relacionados con el acceso a la asistencia técnica europea, así como la posibilidad de participar en proyectos de infraestructuras regionales o en proyectos conjuntos de apoyo al desarrollo en África. Una vez definida con mayor claridad, la Política Europea de Vecindad (PEV) podría emplearse para fortalecer la cooperación entre la UE y Libia. En caso de que Trípoli decida dar muestras de acercamiento a Israel (más allá de permitir la visita de judíos de origen libio al país) con el fin de estrechar las recientemente restablecidas relaciones diplomáticas con EEUU, el Proceso de Barcelona puede ofrecer el marco adecuado para sentarse en la misma mesa sin necesidad de establecer relaciones diplomáticas plenas.

Durante años Libia ha sido un país de destino para numerosos emigrantes africanos. En los últimos tiempos también se ha convertido en un país de tránsito para aquéllos que tratan de llegar a Europa de forma ilegal, a bordo de embarcaciones cuyo destino suelen ser las islas italianas de Lampedusa y Sicilia. Se estima que hay entre 700.000 y un millón de inmigrantes subsaharianos en Libia (cuya población es de 5,5 millones). La UE ha propuesto colaborar con Libia en la lucha contra la inmigración ilegal mediante programas de formación, gestión de demandas de asilo y sensibilización social. A pesar del interés mostrado por Trípoli, aún no se han pro-

⁸ Entrevista a un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Libia, febrero de 2006.

ducido grandes avances en este ámbito. La decisión del Consejo de la UE de levantar el embargo de armas que pesaba sobre el país magrebí se produjo sobre todo por la presión que ejerció Italia para poder suministrar material de vigilancia y control fronterizo a su vecino del Sur.

Según un informe de la Comisión Europea,⁹ Italia ha financiado la repatriación de inmigrantes desde Libia hasta sus países de origen, así como la construcción de campos de detención para inmigrantes ilegales, además de haber dado formación a agentes de policía y suministrado material para el control fronterizo. El proyecto de crear campos para los solicitantes de asilo en territorio libio fue propuesto por Italia y otros países europeos, aunque carece del apoyo unánime de éstos. Varios observadores ponen en duda la compatibilidad de dichos campos con el

A pesar de no tener ningún cargo oficial, más allá de ser el líder de la revolución de al-Fateh, el coronel Gaddafi sigue llevando las riendas del país tras más de 36 años en el poder. Cabe destacar que no existe un mecanismo claro para su sucesión y, de continuar así, es de prever que la era post Gaddafi se inicie con una lucha por el poder entre diversos grupos con intereses socioeconómicos y políticos enfrentados

respeto de los derechos humanos. Según Amnistía Internacional, “las personas que son devueltas a Libia desde Europa están expuestas a sufrir unas condiciones de reclusión degradantes y a ser nuevamente expulsadas a países donde podrían sufrir tortura o cárcel”.¹⁰

Relaciones con España

En cuanto a las relaciones con España, en 2005 el total de las importaciones españolas de Libia ascendió a más de 2.280 millones de euros, mientras que las exportaciones fueron de tan solo 178 millones de euros. Estos datos arrojan un importante déficit comercial de más de 2.103 millones de euros. Casi la totalidad de las importaciones (el 98,2%) fueron combustibles y lubricantes, siendo Libia el suministrador de cerca del 10% del crudo importado por España.¹¹

España tiene una presencia empresarial limitada en Libia, centrada en la industria petrolera. En 2004 Repsol YPF obtuvo una producción neta cercana a los 7,8 millones de barriles de petróleo y es el operador principal del campo de El Sharara en la cuenca de Murzuq, donde recientemente se han descubierto nuevos yacimientos de crudo ligero dulce. Repsol YPF también posee contratos de exploración de gas

y crudo en el golfo de Sirte. Enagás es otra empresa con intereses en Libia, en concreto en la importación de gas natural licuado (GNL) que procede de la planta de Marsa el Brega, cuya capacidad de producción se pretende incrementar sensiblemente, siendo España uno de los clientes interesados en adquirir parte del aumento de producción. Otras grandes empresas con intereses en Libia son: Indra, que ha firmado un contrato para modernizar el control automático del tráfico aéreo civil libio; Navantia, que ha presentado una oferta para la construcción de cinco buques de vigilancia costera y oceánica; y Eurocopter España, que aspira a adjudicarse la modernización de helicópteros libios.

El Gobierno libio ha puesto en marcha planes de diversificación de la economía y proyectos de infraestructuras. La voluntad de diversificar los proveedores debería favorecer el aumento de inversiones españolas en diferentes áreas. Existe un importante potencial –no exento de complicaciones– para realizar proyectos de infraestructuras y aumentar las exportaciones de bienes de equipo y materias primas o semimanufacturas industriales. La deficiente infraestructura del país requiere la realización de grandes inversiones tras el levantamiento de las sanciones para la modernización de la red viaria, plantas de desalinización y de generación de energía, infraestructura turística, aviación y sistemas de riego, entre otros.

A nivel estratégico, España tiene importantes intereses en Libia debido a su proximidad geográfica y a su pertenencia a una región fronteriza, no exenta de graves problemas presentes y potenciales. Libia es un país importante para la estabilidad del Magreb y para la seguridad regional, por lo que se hace necesario intensificar los contactos bilaterales e integrarlo en las estructuras multilaterales donde pueda ejercer un papel constructivo en ese sentido. Un marco adecuado para la normalización de las relaciones de Libia con los países de su entorno, entre ellos España, es su plena incorporación al Proceso de Barcelona. España cuenta a su favor con la ausencia de conflictos recientes y de un pasado colonial con el país magrebí (al contrario que otros países europeos como Italia, el Reino Unido, Francia y Alemania). Para España resulta importante potenciar las relaciones bilaterales con Libia, así como corregir en parte su elevado déficit comercial con este país.

Limitaciones ante una completa normalización

Aún existen numerosos obstáculos ligados a la naturaleza del régimen político libio que dificultan la plena normalización de sus relaciones con el exterior. Algunos de los problemas recurrentes son la falta de coherencia en el diseño y aplicación de las políticas, las trabas burocráticas, el alto grado de discrecionalidad administrativa, la

⁹ *Technical Mission to Libya on Illegal Immigration, Comisión Europea, diciembre de 2004.*

¹⁰ *Amnistía Internacional, “Cooperación entre la Unión Europea y Libia: sin salvaguardias para los refugiados”, 12 de abril de 2005.*

¹¹ *Datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), disponibles en www.icex.es.*

falta de transparencia, el difícil acceso a la información, así como la existencia de un sistema judicial impredecible y un sistema bancario deficiente. Todos estos factores hacen que el país no sea todo lo atractivo que podría ser para los negocios.

Las empresas que desean invertir en Libia se enfrentan a numerosas dificultades, que van desde la ausencia de normas comerciales consolidadas, procedimientos de contratación fiables y garantías jurídicas y financieras hasta la opacidad del sistema de toma de decisiones y la falta de datos estadísticos fiables. No es de prever que todos los obstáculos desaparezcan en el corto plazo, aunque Libia tratará de mostrar algunos gestos para mejorar la confianza de los inversores extranjeros.

Una cuestión que dificulta las relaciones de Libia con el exterior es el caso de las cinco enfermeras búlgaras y el médico palestino que fueron encarcelados en febrero de 1999 y posteriormente condenados a muerte, acusados de contagiar el virus del sida a cientos de niños en el hospital infantil de Bengasi. La UE y otros países han expresado repetidamente sus reservas sobre el proceso judicial. Según estudios científicos, la epidemia de sida en Bengasi comenzó un año antes de la incorporación del personal sanitario a dicho hospital. A pesar de que el Tribunal Supremo libio suspendió las condenas a muerte en diciembre de 2005, este asunto seguirá creando tensiones entre Libia y la comunidad internacional, especialmente en vísperas del ingreso de Bulgaria en la UE. Las negociaciones continúan para buscar una salida a esta crisis que minimice el coste interno para las autoridades libias, mediante la concesión de ayudas internacionales a los afectados por el virus del sida y una mayor colaboración científica europea en asuntos sanitarios.

Según numerosos observadores políticos y activistas de derechos humanos, Libia ha hecho importantes concesiones políticas a los países occidentales, pero casi ninguna a su propia población en lo que se refiere a introducir reformas políticas y mejorar la situación de los derechos humanos. La posición oficial de la UE es que esos dos aspectos son esenciales para el desarrollo de las relaciones con el país magrebí. Sin embargo, algunos activistas libios consideran que esos principios declarados no se corresponden con las actuales políticas europeas hacia Libia y acusan a la UE de hipocresía. Por otra parte, las resistencias internas en Europa a recompensar el régimen libio continuarán mientras éste no demuestre claros signos de mejora en su historial relacionado con las libertades y los derechos humanos.

Conclusiones

Ahora que Libia ha recibido el *certificado* de rehabilitación de la comunidad internacional, no queda claro qué incentivos tiene el coronel Gaddafi para aplicar un amplio programa de reformas que pueda crear el nuevo clima político y económico que tantas veces se ha anunciado. No hay motivos para creer que el régimen cesará en su práctica habitual de realizar cambios continuos de personal y en las distintas instituciones con el fin de evitar la aparición de nuevos centros potenciales de poder. Mientras no se produzcan reformas institucionales de gran calado, la mejora de las relaciones entre Libia y los países occidentales se centrará en aumentar las inversiones en el sector del petróleo, donde existe una creciente competencia entre las compañías estadounidenses y europeas.

Con independencia del ritmo y alcance de las reformas económicas, no cabe esperar que éstas vayan acompañadas de una significativa liberalización política. Por su parte, “Europa y sus Estados miembros están explorando las relaciones comerciales [con Libia] sin cuestionar las asunciones ideológicas o sus implicaciones para la seguridad europea y mediterránea”.¹²

Podría parecer que Libia está viviendo una nueva revolución. La pregunta es si hay suficientes revolucionarios para llevarla a cabo hasta el final. Falta por ver si, además de desarrollar su infraestructura, Libia es capaz de adaptar la superestructura para desempeñar el nuevo papel internacional al que aspira.

Haizam Amirah Fernández

*Investigador Principal de Mediterráneo
y Mundo Árabe, Real Instituto Elcano*

¹² George Joffé, “Libya and Europe”, *The Journal of North African Studies*, vol. 6. n° 4, invierno de 2001.

Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa

El comunicado hecho público el 22 de marzo no anuncia la desaparición de la banda, de ahí que su permanencia requiera respuestas gubernamentales apropiadas destinadas a conseguir la definitiva erradicación del terrorismo.

Rogelio Alonso

Tema

Lecciones de la experiencia norirlandesa en relación con el final del terrorismo del IRA ante la posibilidad de que la organización terrorista ETA ponga término a su campaña de violencia.

Resumen

El alto el fuego de la organización terrorista ETA ha dado lugar a un nuevo escenario que, a pesar de las optimistas valoraciones que lógicamente suscita, continúa planteando importantes desafíos para el Estado español. El comunicado hecho público el 22 de marzo no anuncia la desaparición de la banda, de ahí que su permanencia requiera respuestas gubernamentales apropiadas destinadas a conseguir la definitiva erradicación del terrorismo. En este estadio de la lucha antiterrorista la experiencia de Irlanda del Norte aporta muy valiosas lecciones sobre los procedimientos que deben aplicarse con objeto de que la debilidad de la organización terrorista que ha motivado su declaración de tregua se traduzca en su absoluta y verdadera desaparición. La gestión que del proceso posterior al cese formal de la violencia por parte del IRA en 1994 han llevado a cabo los Gobiernos británico e irlandés ha facilitado la perpetuación de la organización terrorista que todavía hoy continúa involucrada en actividades ilegales al servicio de su brazo político, el Sinn Fein. Es por ello pertinente exponer los errores que se han cometido en el contexto de Irlanda del Norte con el fin de evitar su réplica en nuestro propio país, particularmente cuando se insiste en tomar como modelo dicho referente estableciéndose a menudo el paralelismo entre ambos escenarios con escaso rigor y desde la tergiversación.

Análisis

El denominado “proceso de paz” norirlandés ha sido tomado como referente por numerosos políticos y periodistas en nuestro país que buscan su aplicación al ámbito vasco. Muchos de ellos asumen como premisa el final feliz del mismo al entender que ha garantizado el final del terrorismo del IRA así como su desarme. Por ello sugieren que el proceso que se inicia con el alto el fuego de ETA exigirá un pragmatismo como el que han mostrado dirigentes británicos e irlandeses. Deducen en consecuencia que el proceso hasta el final de ETA será largo, duro y difícil, si bien insisten en que en absoluto pagará nuestra democracia ningún precio político a cambio. Sin embargo, la interpretación que muchos de estos observadores realizan del proceso norirlandés ignora que tanto el Gobierno británico como el irlandés han permitido finalmente que el terrorismo extrajera réditos políticos. Otros se sirven precisamente de esa realidad para anticipar y justificar que el gobierno español lleve a cabo concesiones en aras de un supuesta practicidad necesaria para solucionar el conflicto vasco. Por ello esa insistencia en el modelo norirlandés hace temer que éste se convierta en coartada para legitimar lo que podría llegar a ser una contra-producente política antiterrorista en relación con ETA si el paralelismo entre uno y otro proceso se sigue estableciendo sin el rigor debido.

¿Un final feliz para el proceso norirlandés?

En primer lugar debe cuestionarse la generalizada asunción del “final feliz” del proceso norirlandés que tan recurrente resulta para la comparación. La enorme polarización política y social existente hoy en Irlanda del Norte, donde el Gobierno autonómico continúa suspendido desde el otoño de 2002 y en donde la segregación geográfica entre comunidades no ha dejado de crecer, arroja serias dudas sobre una valoración del proceso norirlandés tan erróneamente positiva como exagerada. Es muy convincente atribuir estas consecuencias a una equivocada gestión del proceso posterior al alto el fuego del IRA, sentando un precedente que debería evitarse en nuestro país. En contra de quienes ensalzan el pragmatismo de Tony Blair o Bertie Ahern, primeros ministros del Reino Unido e Irlanda, sus propios pronunciamientos públicos exponen cómo el terrorismo ha conseguido recuperar parcialmente por la vía política lo que perdió policialmente. En enero de 2005 Ahern reconocía en el parlamento irlandés que en su intento por integrar al Sinn Fein en el sistema había ignorado las actividades delictivas en las que el IRA venía viéndose involucrado. Un año antes Blair afirmaba que no debía tolerarse una situación en la que representantes de la voluntad popular se vieran obligados a compartir el gobierno de Irlanda del Norte con un partido como el Sinn Fein asociado a un grupo terrorista todavía activo, esto es, el IRA. El aparente ultimátum del primer ministro británico había sido

planteado ya varios años atrás, como se refleja en un discurso pronunciado en octubre de 2002 en el que también exigió “el final de la tolerancia de actividades paramilitares”, así como una “misma ley para todos que se aplique a todos por igual”. Aunque seguidamente aseguró que a partir de ese momento “un crimen es un crimen”, el paso del tiempo demostró que los crímenes del IRA recibían diferente consideración.

La impunidad política, jurídica, e incluso moral, que se desprende de semejante actitud no ha garantizado la ansiada desaparición de la organización terrorista, beneficiando por el contrario los objetivos propagandísticos de su entorno al favorecer la legitimación de quienes han sido capaces así de condicionar el sistema político, debilitando por ello la autoridad constitucional. Estas concesiones fueron criticadas por los representantes de la comunidad unionista durante años, siendo dichas reclamaciones ignoradas una y otra vez por los gobiernos británico e irlandés al entender que el fortalecimiento político del Sinn Fein aseguraba la continuidad del alto el fuego del IRA. Con ese contradictorio comportamiento, que sigue manteniéndose en gran medida, se transmitía a la opinión pública un nocivo mensaje: el Sinn Fein puede condicionar la normalización política a pesar de incumplir las reglas del juego democrático. Este comportamiento ha contribuido a fortalecer electoralmente al Sinn Fein al tiempo que ha debilitado a los partidos que hasta las últimas elecciones habían contado con el respaldo mayoritario del electorado nacionalista y unionista, esto es, el SDLP (*Social Democratic and Labour Party*) y el UUP (*Ulster Unionist Party*). Todo ello mientras el movimiento republicano, integrado por el Sinn Fein y el IRA, se convertía en “uno de los más sofisticados grupos criminales del mundo”, como ha reconocido Ian Pearson, ministro del Ministerio para Irlanda del Norte (NIO, *Northern Ireland Office*).

Las actividades criminales del IRA no se limitan a actividades mafiosas que desde algunos sectores de opinión se interpretan como inevitables después de décadas de violencia. A menudo se minimiza la gravedad de semejantes delitos mediante una ventajosa comparación con la renuncia del IRA a su campaña de asesinatos sistemáticos. Sin embargo, los sucesivos informes elaborados por la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses (IMC, *Independent Monitoring Commission*) confirman que el IRA continúa financiándose y recabando inteligencia, poniendo sus actividades ilegales al servicio de la estrategia política del Sinn Fein. Así pues, el Sinn Fein ha optado por las vías políticas pero sin renunciar a la contribución de las actividades ilegales del IRA, que continúa al servicio del partido político garantizándole beneficios mediante la promesa de una desaparición de la banda que nunca llega, al ser dicho objetivo la fuente de concesiones hacia quienes supuestamente habrían de conseguirlo. Es decir, las *vías políticas* emprendidas no son en absoluto democráticas, al operar el partido político con el apoyo

criminal, logístico y financiero de una organización ilegal, propiciando un escenario que seduce a ETA y a Batasuna. Es por ello por lo que la eficacia de la lucha antiterrorista debe evaluarse no sólo en función de la disminución de la violencia como consecuencia de razonamientos tácticos de la organización terrorista ante su debilidad y declive de su ciclo vital, sino teniendo en cuenta además la capacidad de coacción y control que su brazo político, y por tanto la propia banda, pueden llegar a ejercer sobre las instituciones políticas y la sociedad si reciben un respaldo y una legitimación tan innecesarios como perjudiciales para los intereses estatales.

La valoración que el ministro británico para Irlanda del Norte hacía del informe emitido en febrero por la referida comisión, revela los peligros que entraña para nuestra democracia replicar un modelo como éste que sin duda resulta atractivo para ETA y

Esa insistencia en el modelo norirlandés hace temer que éste se convierta en coartada para legitimar lo que podría llegar a ser una contraproductiva política antiterrorista en relación con ETA si el paralelismo entre uno y otro proceso se sigue estableciendo sin el rigor debido

Batasuna. En opinión de Peter Hain, el informe demostraba “que el IRA se está moviendo en la buena dirección” al no haber “asesinatos” ni “robos de bancos”. “Si comparamos la situación actual con el lugar en el que estábamos hace diez años, el cambio ha sido abismal”, añadió. Esa sustancial mejora puede ser cuestionada si se enmarca en el contexto adecuado, valorándose como se merece la influencia que sobre el sistema político y la democracia tienen actos criminales como los descritos. Más de diez años después del alto el fuego del IRA, el Gobierno británico ha acomodado su sistema democrático con objeto de que las actividades ilegales de una organización terrorista sean valoradas como aceptables siempre y cuando no rebasen un umbral, el asesinato, que de todos modos los terroristas no consideran oportuno traspasar en un nuevo contexto nacional e internacional desfavorable para ello. Véase asimismo cómo de manera totalmente contradictoria con los principios fijados por la propia comisión como guía de su actuación, su informe apoyaba además la finalización de las sanciones económicas sobre el Sinn Féin impuestas tras diversos incidentes que demostraban la estrecha implicación del partido político con la organización terrorista. Así pues, tras una suerte de período de descontaminación, y aún a sabiendas de la existencia de semejantes vínculos, se aceptaba renunciar a la referida penalización. De ese modo se desincentivaba al brazo político a separarse de la organización terrorista manteniéndose una dinámica ya habitual a lo largo de los últimos años. Esta

comisión sustenta su trabajo en unos principios democráticos básicos, entre ellos el que destaca como inaceptable que un partido político, y particularmente sus líderes, expresen su compromiso con la democracia y la ley mientras su actitud demuestra lo contrario. Considera además que los partidos políticos no deben beneficiarse de su asociación con actividades ilegales. Sin embargo, la comisión reconocía que el IRA seguía activo, realizando actividades criminales que, autorizadas por sus líderes, servían a la estrategia política del Sinn Fein, exponiendo por tanto la incoherencia de un comportamiento basado en ignorar las consecuencias de la asociación entre el grupo terrorista y sus representantes políticos.

La eficacia de la lucha antiterrorista debe evaluarse no sólo en función de la disminución de la violencia como consecuencia de razonamientos tácticos de la organización terrorista ante su debilidad y declive de su ciclo vital, sino teniendo en cuenta además la capacidad de coacción y control que su brazo político, y por tanto la propia banda, pueden llegar a ejercer sobre las instituciones políticas y la sociedad si reciben un respaldo y una legitimación tan innecesarios como perjudiciales para los intereses estatales

¿Alto el fuego permanente?

La reciente declaración de alto el fuego de ETA ha sido comparada con la que emitiera en 1994 el IRA. Erróneamente se ha asegurado que el término “permanente” utilizado por ETA en esta ocasión era una réplica de la expresión empleada en aquel entonces por el grupo terrorista norirlandés. De ese modo se ha pretendido transmitir el mensaje de que esta vez el cese de ETA es realmente definitivo e irreversible. Sin embargo es absolutamente falso que el IRA hiciera uso de semejante expresión en aquel entonces, hablando en cambio de “un cese completo de sus actividades militares”. El hecho de que ETA sí lo haya introducido no debe ser tomado tampoco como prueba concluyente de que la banda vaya a desaparecer de la escena política. Por el contrario este episodio nos demuestra lo inútil que resulta centrarse en el análisis de comunicados como estos emitidos por organizaciones terroristas responsables de muchas otras declaraciones en las que constantemente se han justificado los injustificables asesinatos de seres humanos cometidos por sus activistas.

Las palabras de los grupos terroristas pueden interpretarse de modos diversos en función de los deseos de quienes interpretan esos gestos. Por ello, más allá de la mera retórica lo que verdaderamente debe exigírsele a la organización terrorista son hechos objetivos que demuestren de forma inequívoca su absoluta desaparición y disolución. Así lo

aconseja la experiencia norirlandesa donde constantemente, a lo largo de más de diez años, los prometedores y sucesivos anuncios del IRA han sido calificados como históricos a pesar de que todavía hoy este grupo terrorista se mantiene activo. Ciertamente es que el IRA ha renunciado a su campaña de asesinatos sistemáticos como consecuencia de los elevados costes políticos y humanos que los mismos generan. Sin embargo, y tal y como ha destacado la comisión encargada de supervisar el estado del alto el fuego de los grupos terroristas norirlandeses, el IRA “se ha adaptado a los nuevos tiempos”. De ese modo, como se ha señalado, el IRA continúa financiándose y recopilando inteligencia mediante actividades ilegales que pone al servicio de la estrategia política del Sinn Fein, todo ello con la autorización de líderes que dirigen simultáneamente una y otra formación.

Este es el motivo por el que la declaración del pasado mes de julio en la que el IRA anunciaba el final de su “lucha armada” era en gran medida redundante a pesar de que todavía hoy es utilizada en nuestro país para respaldar la conclusión de un supuesto “final feliz” del proceso norirlandés que no se corresponde con la realidad. El anuncio del IRA fue ensalzado casi unánimemente, ignorándose que la organización terrorista había abandonado años antes su denominada “lucha armada” consciente de la ineficacia de la misma después de treinta años de asesinar sin conseguir sus objetivos. Sin embargo, los responsables del IRA no renunciaron, ni antes ni después, a mantener presente al grupo terrorista como elemento de presión con el que coaccionar a la sociedad y a los políticos, prometiendo por un lado su desaparición pero condicionándola a que el Sinn Fein recibiera concesiones políticas. Esta estrategia ha dado lugar a numerosos engaños, incurriendo los primeros ministros de Gran Bretaña e Irlanda en una contraproducente indulgencia hacia el brazo político de la organización terrorista. No sería extraño que ETA y Batasuna persiguieran un escenario semejante, de ahí la necesidad de mantener desde el Gobierno exigencias firmes como el desarme y la disolución total de la banda, reclamaciones que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna. Esto impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores, incentivándose a su vez a Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición.

En contra de este criterio hay quienes sostienen, a mi juicio de manera equivocada, que esa firmeza llevaría a ETA a recuperar la violencia. En este sentido es útil preguntarse si realmente puede recurrir nuevamente a sus asesinatos sistemáticos esperando resultados positivos de los mismos. No es tan plausible dicho retorno al terrorismo en un contexto nacional e internacional claramente desfavorable. Esas cambiantes circunstancias, motivadas por un declive de su ciclo vital complementado por una debilidad operativa y organizativa considerable, resultado de una eficaz presión política, policial, social y judicial a lo

largo de los últimos años, ha restado eficacia a la violencia terrorista desaconsejando por ello su utilización. Cierto es que ETA continúa siendo capaz de emplear de nuevo el asesinato, si bien la banda también parece consciente de los elevados costes políticos y humanos que provocaría para su organización y el entorno de la misma. Es por ello por lo que la presión sobre ETA y su entramado, incluido el brazo político de la misma, sigue representando el factor más valioso para garantizar la eventual erradicación del terrorismo. Así pues, el alto el fuego de la organización terrorista no debe ser recompensado con la legalización de Batasuna. La vuelta a la legalidad de la formación que habría de sustituir a Batasuna sólo puede producirse cuando esa agrupación cumpla las condiciones democráticas que la ley impone, siendo para ello imprescindible la inequívoca desaparición de la banda y su desarme.

Siguiendo el modelo norirlandés se aprecia cómo algunos sectores apuestan por interpretar como muestras inequívocas de la voluntad de ETA de poner fin a la violencia gestos aparentemente esperanzadores aunque estos no equivalgan a la mencionada desaparición y desarme de la banda. Se argumenta en defensa de este punto de vista que no resulta realista exigir de ETA semejantes obligaciones y que el tiempo convertirá paulatinamente en irrelevante a la banda. No obstante, se contribuye así a alimentar una dinámica mediante la cual la organización terrorista deja de constituir una carga para Batasuna, pues es precisamente la existencia de la banda y la promesa de su desaparición la que le garantizan beneficios al brazo político. Como consecuencia de esta lógica se libera a la banda de la presión que debería recaer sobre ella, transfiriéndose la responsabilidad por el mantenimiento del alto el fuego a políticos y ciudadanos que se ven así coaccionados para aceptar condiciones que no son plenamente democráticas. En absoluto puede serlo tolerar que una organización ilegal continúe existiendo y manteniéndose inextricablemente unida a una formación política a pesar de las declaraciones formales de sus dirigentes respaldando procesos democráticos que se ven en contradicción con sus comportamientos antidemocráticos al beneficiarse de su asociación con dicha presencia. Como el ejemplo del IRA confirma, la mera existencia de una organización terrorista constituye un factor de coacción que jamás debería ser tolerado como aceptable.

¿Son necesarios el desarme y la excarcelación?

La impunidad e indulgencia que ha caracterizado el proceso norirlandés ha convertido en ineficaz el desarme del IRA anunciado el pasado año. Aunque presentado casi unánimemente como un gran gesto, la forma en la que se llevó a cabo impidió que cumpliera el objetivo que motivó esta exigencia en 1995: convencer a las víctimas del terrorismo del IRA de su voluntad inequívoca de poner fin a la violencia. El retraso en el desarme y su metodología impidieron generar la confianza que se buscaba con esa medida. Al contrario de lo que

muchos observadores han defendido, el desarme de la organización terrorista y la metodología con la que debía acometerse eran vitales para el éxito del proceso de erradicación del terrorismo. Tres fueron los gestos de desarme que precedieron al último acontecido en septiembre de 2005. Ninguno de ellos se realizó de un modo que permitiera, tal y como se requería, que el desarme fuera verdaderamente eficaz. Así se desprende de las palabras del propio Martín McGuinness cuando en vísperas del desarme acometido en octubre de 2003 reconocía que los anteriores actos no se habían llevado a cabo en condiciones “convincientes”, de ahí que admitiera la

El alto el fuego de la organización terrorista no debe ser recompensado con la legalización de Batasuna. La vuelta a la legalidad de la formación que habría de sustituir a Batasuna sólo puede producirse cuando esa agrupación cumpla las condiciones democráticas que la ley impone, siendo para ello imprescindible la inequívoca desaparición de la banda y su desarme

necesidad de “transparencia” para que los pasos del IRA no causaran “decepción”. El propio general canadiense John De Chastelain, encargado de supervisar el decomiso de armas, subrayó también que desde 1999 insistió en sus contactos con el IRA en que, a menos que el desarme fuera “visible”, se dudaría de las buenas intenciones del grupo terrorista, concluyendo por tanto que las dudas convertirían en ineficaz el desarme. A pesar de ello, en octubre de 2003 y en septiembre de 2005 se cometieron los mismos errores. La única diferencia entre uno y otro acto fue que en esta última ocasión un religioso protestante y otro católico presenciaron el desarme, sin que se hiciera público un inventario de las armas o fotografías de éstas, como se había reclamado previamente. Sin embargo, esta única distinción resultaba insuficiente para garantizar la visibilidad y transparencia exigidas.

Dichos religiosos no eran aquellos que los unionistas habían propuesto, sino otros que sustituyeron a los que el IRA había rechazado. El recambio católico era particularmente desafortunado, al tratarse del padre Alec Reid. Esta figura, presentada en Irlanda del Norte y el País Vasco como un generoso pacificador, carece de la confianza necesaria entre la comunidad unionista al haber sido su objetivo durante años la constitución de un frente pan nacionalista en el que los partidos nacionalistas no violentos se coaligaran con quienes han defendido el terrorismo. De ese modo, ha insistido Reid, el grupo terrorista cesaría en su violencia, ahora bien, a cambio de una peligrosa legitimación que haría que la debilidad de dicha organización y de su brazo político se transformara en fortaleza. Lógico es por tanto que el unionismo desconfíe de quien ha defendido para el IRA algo que también parece propugnar para ETA, es decir,

que las organizaciones terroristas obtengan, una vez cesen sus campañas, aquello que no pudieron conseguir a causa de las mismas, pero que en ese escenario lograrían precisamente como consecuencia de su terrorismo. En otras palabras, mediante tan sutil mecanismo de coacción y manipulación el terrorismo resultaría finalmente eficaz a pesar de la presentación pública de lo contrario.

En este sentido, obsérvese cómo las críticas de los unionistas al método de desarme han sido ignoradas en gran medida, exponiendo contradicciones en la política británica que benefician al IRA y al Sinn Fein al concederles esa legitimidad antes negada. Así

Las reclamaciones de las víctimas en Irlanda del Norte exigiendo la reapertura de casos todavía sin resolver han llevado finalmente a la policía a declarar que así debe procederse. Esta actitud muestra, por un lado, la necesidad social de justicia y reparación, y cómo la ausencia de ambas obstaculiza la normalización y la convivencia

se desprende de la declaración de De Chastelain al anunciar que el decomiso careció de la “transparencia” requerida, extremo que, según él, debía aceptarse porque “el IRA dijo que no iba a suceder”, ya que el grupo no admitiría que el desarme sirviera para transmitir una imagen de “humillación” o “culpa”. Se asumía por tanto como realista el planteamiento de una organización terrorista que además obtenía a cambio la promesa de que las personas con causas pendientes en busca y captura podrían regresar a sus hogares con total impunidad. Las declaraciones de Peter Hain, ministro británico para Irlanda del Norte, son especialmente alarmantes al asegurar que esta medida es “dolorosa” para las víctimas pero “necesaria para cerrar la puerta de la violencia”. Sin embargo, la polémica suscitada tras el anuncio de semejante iniciativa, ampliamente rechazada, hizo necesario que el Gobierno británico la retirara a la espera de un clima de opinión más favorable para su adopción.

En ese contexto, la excarcelación anticipada de los presos pertenecientes a organizaciones terroristas se ha revelado como ineficaz, alimentando una lógica conducente a la peligrosa legitimación de la violencia al favorecer una narrativa del conflicto basada en la difusión de responsabilidad de quienes utilizaron el terrorismo. Esta dinámica ha derivado en una indulgencia que ha fortalecido a aquellos que practicaron el terrorismo: los presos han dejado de serlo pese a que las organizaciones terroristas continúan existiendo y extorsionando. Al mismo tiempo las víctimas, que siguen reclamando justicia y reparación, son presentadas como un mal necesario e inevitable, adquiriendo las injusticias cometidas sobre ellas justificación y sentido. Se prostituye así su memoria ignorándose que la mayoría de la sociedad jamás

recurrió al terrorismo a pesar de sufrirlo, desincentivándose por tanto el respeto a los valores democráticos. La excarcelación subestimaba cómo estos factores afectan decisivamente la esfera política. Sin embargo la situación actual en Irlanda del Norte, caracterizada por la parálisis institucional y una profunda polarización política y social, demuestra que una democracia no puede funcionar con semejante déficit. Es por ello por lo que Bertha McDougall, viuda de un policía norirlandés asesinado por el grupo terrorista nacionalista INLA (Irish National Liberation Army), nombrada “Comisionada de las Víctimas en Irlanda del Norte”, ha subrayado que la sociedad norirlandesa será incapaz de progresar a menos que las autoridades se ocupen de las necesidades de las víctimas.

Las reclamaciones de las víctimas en Irlanda del Norte exigiendo la reapertura de casos todavía sin resolver han llevado finalmente a la policía a declarar que así debe procederse. Esta actitud muestra, por un lado, la necesidad social de justicia y reparación, y cómo la ausencia de ambas obstaculiza la normalización y la convivencia. Asimismo desvela lo incongruente que resulta excarcelar a presos sentenciados mientras se anuncia que otros criminales serán procesados si se encuentran suficientes pruebas, pero con objeto de ser inmediatamente excarcelados. Incoherente resulta asimismo anunciar, como se hizo en noviembre de 2005, una ley que permitiría la impunidad de quienes tienen todavía causas pendientes con la justicia como resultado de sus acciones terroristas y que permanecen en busca y captura, medida ésta que afecta seriamente a los derechos humanos de las víctimas. Finalmente, como se ha indicado, semejante proyecto tuvo que ser retirado ante el amplio rechazo suscitado. Un rasgo diferencial agravaría para el caso vasco las consecuencias de una impunidad similar, pues la violencia etarra no ha sido contrarestanda con terrorismo de reacción, habiendo respondido la sociedad civil con un pacifismo que sería totalmente despreciado. De ese modo determinados individuos encontrarían en el incumplimiento de la ley un estímulo para la trasgresión y el recurso a la violencia, pudiendo favorecer también la represalia violenta de algunos ciudadanos ante la injusta inmunidad de quienes han infringido las normas del Estado de Derecho.

Conclusiones

A veces se reivindica el estudio de las causas de fenómenos terroristas exógenos mientras se ignora la etiología del terrorismo etarra, o sea, el absolutismo ideológico de individuos fanáticos que persiguen la imposición violenta de un ideario nacionalista. Al ignorarse dichas causas, aceptando un modelo para el final del terrorismo que incluya concesiones como las descritas en las líneas precedentes, puede impedirse la erradicación

del mismo. ETA y Batasuna no son entes ajenos, sino instrumentos de un movimiento que pretenden los mismos fines. Tanto ETA como Batasuna ambicionan un poder que paradójicamente el Estado podría facilitarles al entender que una renuncia táctica a la violencia equivale realmente a una auténtica metamorfosis del movimiento terrorista y a su desaparición.

En nuestro país se tiende a limitar el precio político que el Estado habría de pagar al ámbito de los presos etarras, argumentándose que las circunstancias políticas habrían cambiado y que el objetivo último de la paz así lo exigiría. Apréciase cómo determinados movimientos tácticos de ETA, entre ellos el anuncio del cese de sus actividades terroristas en un contexto de debilidad en el que resulta poco rentable la reactivación de los asesinatos, podrían facilitar un escenario en el que bajo el pretexto de una modificación de las “circunstancias políticas”, principios esenciales de la democracia y de la lucha antiterrorista fueran abandonados, incluida la máxima recogida en la resolución del Congreso de que “la violencia no tiene precio político”. Así ocurriría si la separación de poderes en la que se sustenta nuestro sistema democrático fuera ignorada con el objeto de favorecer beneficios penitenciarios con la excusa de que políticamente ciertas medidas son imprescindibles para el avance del “proceso de paz”.

El análisis y evaluación de las iniciativas adoptadas en Irlanda del Norte nos demuestra lo erróneo que resulta abandonar las exigencias objetivas que deben demostrar claramente la voluntad inequívoca de poner fin a la violencia por parte del grupo terrorista. Confirma además la necesidad de comprobar que el gobierno cumpla rigurosamente sus firmes promesas en torno a la verificación de una desaparición absoluta de la organización terrorista sin incurrir en concesiones al brazo político de la banda que permitan la perpetuación de ésta. En consecuencia, su desarme y su disolución total representan exigencias realistas y prácticas que deberían satisfacerse y verificarse rigurosamente antes de considerar cualquier diálogo sobre los presos y otras cuestiones políticas como la vuelta a la legalidad de Batasuna, lo cual impediría que la organización terrorista coartase al resto de los actores. Este modelo incentivaría a Batasuna a exigir a ETA su verdadera desaparición y facilitaría la restauración del consenso entre los principales partidos democráticos.

Cierto es que diversas declaraciones de representantes políticos insisten en que la “ausencia de violencia” debe ser clara para avanzar en el denominado “proceso de paz”. Dichas declaraciones públicas deben mantenerse evitando la tentación de rebajar gradualmente las exigencias a pesar de su previa apariencia de firmeza. Así se aprecia ya al atribuir a Batasuna unas intenciones pacíficas y de alejamiento de ETA que no vienen corroboradas por hechos, hasta el punto de que se ha llegado a plantear que su legalización sería posible con una mera declaración

formal en contra de la violencia. De esa manera se facilitaría que un partido político inextricablemente unido a ETA busque una fórmula verbal que le permita vencer su ilegalización a pesar de mantener el vínculo con la organización terrorista, burlando de ese modo la política antiterrorista que llevó a su ilegalización. Quienes proponen ese proceder en el caso de que se percibiese un aparente distanciamiento entre Batasuna y ETA, parecen asumir como eficaz y necesaria una cierta “ambigüedad” con el fin de hacer avanzar el denominado “proceso de paz”, error cometido en Irlanda del Norte, donde dicha ambigüedad se convirtió más bien en destructiva. Se sustentó en incoherentes comportamientos por parte de los Gobiernos británico e irlandés que si bien inicialmente establecieron exigencias al Sinn Fein que aparecerían como firmes en el momento de ser impuestas,

Cierto es que diversas declaraciones de representantes políticos insisten en que la “ausencia de violencia” debe ser clara para avanzar en el denominado “proceso de paz”. Dichas declaraciones públicas deben mantenerse evitando la tentación de rebajar gradualmente las exigencias a pesar de su previa apariencia de firmeza

fueron gradualmente abandonadas. Esa peligrosa inconsistencia ha dañado gravemente la credibilidad de los Gobiernos, debilitando su autoridad y beneficiando en cambio al Sinn Fein al transmitirse el mensaje de que este partido, reconocido por todos los actores como el brazo político de un grupo terrorista todavía activo, puede condicionar la normalización política a pesar de incumplir las reglas democráticas. Al mismo tiempo se ha facilitado de este modo su crecimiento electoral al trasladarse al electorado el mensaje de que el fortalecimiento del Sinn Fein garantizaba el mantenimiento del alto el fuego del IRA.

Rogelio Alonso

*Profesor de Ciencia Política en la
Universidad Rey Juan Carlos*

El gas: una cuestión conflictiva en América Latina *

Tras las crisis energéticas de Brasil y Argentina a principios de la década, y en plena crisis energética mundial, los grandes consumidores de energía en el sur del continente están explorando diferentes opciones para asegurar sus fuentes futuras de gas y posibles planes de integración energética a nivel regional. Todas las fórmulas para adecuar la oferta a la demanda regional presentan problemas políticos y económicos de difícil solución

Paul Isbell

* Este ARI fue escrito antes del anuncio de la nacionalización de los hidrocarburos bolivianos el primero de mayo de 2006 y ha sido actualizado a día 12/05/2006.

Tema

La cuestión de la energía –particularmente el gas– se ha complicado recientemente en América Latina, poniendo en entredicho tanto la seguridad energética de la zona como los intereses de España¹.

Resumen

Tras las crisis energéticas de Brasil y Argentina a principios de la década, y en plena crisis energética mundial, los grandes consumidores de energía en el sur del continente están explorando diferentes opciones para asegurar sus fuentes futuras de gas y posibles planes de integración energética a nivel regional. Todas las fórmulas para adecuar la oferta a la demanda regional presentan problemas políticos y económicos de difícil solución. De cualquier manera, estas dificultades, aunque a primera vista se perciban como amenazas a la seguridad energética de la región y a los intereses de España, pueden convertirse en los ejes mismos de la colaboración e incluso de las posibles soluciones.

Análisis

Introducción

Durante los últimos años la cuestión energética se ha caldeado. Ninguna zona del mundo ha permanecido inmune a los cambios en el sector o a las implicaciones económicas y geopolíticas que estos suponen. En América Latina –donde EEUU se juega mucho en

términos de su seguridad energética, y donde España tiene concentrada buena parte de sus intereses económicos en el extranjero– el escenario energético se ha complicado recientemente. Este artículo analiza, en grandes líneas, los cambios y retos más importantes del panorama energético de la región, poniendo un énfasis especial en el tema del gas.

Oferta y demanda

Téoricamente, América Latina está relativamente bien dotada de recursos energéticos. América Central, excepto México, y América del Sur poseen un 8,5% de las reservas probadas mundiales de petróleo convencional, no mucho menos que África (9,4%) y la ex URSS (10,1%), y bastante más que Asia (3,5%) y Europa (2%). De todas formas, de este 8,5%, la mayor parte está en Venezuela (un 6,5% del total mundial). Por otro lado, la región queda bastante peor parada respecto al gas. América Central y del Sur poseen únicamente el 4% de las reservas probadas de gas en el mundo, solo por delante de Europa (con el 3,2% del gas mundial). Pero América Latina todavía consume cantidades relativamente modestas tanto de petróleo como de gas. Hoy en día la región sigue siendo una exportadora neta de energía, con una producción de 6,78 millones de barriles diarios (mbd) en 2004 (el 8,8% de la producción mundial) frente a un consumo de 4,74mbd (5,9%). En el terreno del gas, América Latina produce alrededor de 130.000 millones de metros cúbicos (mn mc) –más del 12% de la producción mundial de gas– mientras consume algo menos (casi 120.000 mn mc, o más del 11,5% del total mundial).

Aunque el balance energético de la región sigue siendo positivo, esta situación fácilmente podría cambiar. En primer lugar, la demanda energética seguirá aumentando –en todas sus vertientes (petróleo, gas y electricidad) –, especialmente si América Latina desea soportar un ritmo de crecimiento económico alto y estable. En segundo lugar, para hacer posible el crecimiento económico y un mayor consumo energético, la región tendrá que seguir experimentando aumentos en los niveles de inversión en el sector energético, no sólo para seguir incrementando la producción sino también para lograr una integración más profunda tanto con los sistemas energéticos mundiales como dentro de la propia región. La Agencia Internacional para la Energía estima que América Latina necesitará 1,3 billones de dólares en nuevas inversiones en el sector energético antes de 2030 para afrontar el incremento de la demanda. Esta inversión tendrá que abarcar no solo la exploración y el desarrollo sino también la construcción, por un lado, de gasoductos y terminales para el gas licuado y, por otro, de nuevas centrales eléctricas y redes de distribución.

Para bien o para mal, la región está dividida en productores y consumidores netos. Esta diferenciación será cada vez más notable en el futuro, precisando una integración energética regional más profunda y

¹ La versión original de este análisis fue publicada en los Cuadernos de Energía, Nº 12, Marzo 2006.

eficaz. En el terreno del gas, Chile es el país con una mayor dependencia de las importaciones. Importa dos tercios de su consumo energético, y ha dependido mucho del gas argentino (20mn de mc/d), que hasta hace muy poco proporcionaba la energía para el 25% de su electricidad (y más de la mitad en las zonas del norte). Chile tiene sólo 28.000 millones de metros cúbicos (mc) de reservas de gas, mientras su demanda proyectada hasta 2025 será de 196.000 millones de mc. Argentina ha sido, tradicionalmente, un fuerte exportador de gas –y todavía es el mayor productor de América Latina (45.000 millones de mc producidos en 2004, un 50% más que Venezuela)–, pero ahora experimenta crecientes dificultades para aumentar su producción (y, lo que es más importante, el nivel de inversiones necesarias para hacerlo) y se podría convertir rápidamente en un importador neto de gas. Brasil, el país con las terceras mayores reservas de gas de la región, tiene bastante potencial a medio y largo plazo (con casi un billón de mc en reservas y grandes posibilidades de descubrir más), pero en el corto plazo sigue siendo un importador neto importante.

Por otro lado, las grandes reservas de gas en el continente están concentradas en la zona andina, particularmente en Venezuela, Bolivia y Perú. El panorama, grosso modo, es tal que los países andinos tienen más potencial para exportar gas a corto y medio plazo, mientras que los países del Cono Sur (Argentina, Brasil y Chile) tendrán una necesidad cada vez mayor de encontrar fórmulas para integrarse con los países andinos y el mundo en general para poder importar cantidades crecientes de gas.

Crisis energética y planes de integración

Después de la crisis eléctrica de Brasil en 2001-2002 y la crisis del gas en Argentina en 2003-2004, el panorama energético de América Latina se ha vuelto cada vez más complejo. El caso argentino fue emblemático. Cuando el peso se devaluó, el Gobierno convirtió las tarifas de gas a la devaluada moneda nacional y las congeló. El precio del gas (que se utiliza para la mitad de la mezcla energética argentina) cayó un 67%. Al recuperarse la economía del gran *crack* de 2002, la demanda energética aumentó sustancialmente. Pero la oferta seguía estancada por la falta de nuevas inversiones provocada por la incertidumbre jurídica. En 2004, las reservas probadas de gas argentino estaban un 35% por debajo de sus niveles de 2000. Para garantizar el suministro interno, el Gobierno argentino cortó las exportaciones a Chile, el destino tradicional de los excedentes argentinos. Este recorte de entre el 20% y el 50% del suministro a Chile estuvo a punto de provocar una crisis energética. Sólo fue evitada por las torrenciales lluvias chilenas, que generaron temporalmente un aumento de la

producción hidroeléctrica. Aunque Argentina ha permitido la subida de las tarifas para los grandes consumidores industriales, los precios residenciales siguen controlados, manteniendo la incertidumbre respecto a las inversiones y la oferta en Argentina y amenazando a la futura seguridad energética de Chile.

Este patrón argentino, de un cambio brusco –y negativo para los intereses de los inversores privados– en el marco legal del sector de hidrocarburos, seguido por una caída en las inversiones, una escasez de oferta y una interrupción en el suministro (actual o

La Agencia Internacional para la Energía estima que América Latina necesitará 1,3 billones de dólares en nuevas inversiones en el sector energético antes de 2030 para afrontar el incremento de la demanda. Esta inversión tendrá que abarcar no solo la exploración y el desarrollo sino también la construcción de gasoductos y terminales para el gas licuado y de nuevas centrales eléctricas y redes de distribución

proyectado) a los países vecinos –minando así el potencial para una integración energética más estable y profunda– se ha convertido en un *leitmotiv* recurrente a lo largo y ancho del continente. Esta dinámica se ha complicado incluso más por el resurgimiento de rivalidades nacionales entre Bolivia, Chile y Perú y por las ambiciones políticas del Gobierno venezolano de promover su propia versión de la integración energética continental.

La promesa y problema de Bolivia

Con la crisis del gas argentino, Bolivia se perfiló como el gran suministrador potencial de gas para el Cono Sur. Entre 1997 y 2004 las grandes empresas energéticas (incluyendo Petrobras, Repsol YPF, Total y British Gas) invirtieron casi 5.000 millones de dólares en el sector de hidrocarburos (principalmente gas) de Bolivia. El país llegó a exportar 30 millones de mc/d, especialmente a Brasil y Argentina, y había planes de inversiones importantes para expandir la red de gasoductos a Brasil y Argentina (lo que posiblemente ayudaría a Chile, por lo menos indirectamente) y también para llevar el gas directamente de Bolivia a Chile, donde una terminal de gas licuado en proyecto (promovida por Repsol YPF) re-exportaría el gas licuado a México y EEUU (y posiblemente a Chile en un futuro inmediato).

Pero, en 2004, el movimiento interno contra la liberalización de la economía boliviana hizo del gas su principal reivindicación frente a los intereses extranjeros. La idea de licuar el gas en Chile fue abandonada y en mayo de 2005, tras la caída del Gobierno de Sánchez de Lozada, el Congreso aprobó

una nueva Ley de Hidrocarburos que aumentó los impuestos sobre la producción del 18% al 50%. A finales del año pasado, el nuevo Gobierno electo de Evo Morales anunció su intención de “nacionalizar” los recursos nacionales –aunque insistió que tal proyecto no incluía planes de expropiar los activos de las empresas extranjeras–, generando más incertidumbre en el panorama de seguridad jurídica de la región y poniendo en entredicho los proyectos para suministrar Chile, Brasil y Argentina con más gas boliviano. Pero sólo hace unas semanas, el gobierno de Morales decretó que los términos contractuales con las compañías energéticas extranjeras tendrían que ser renegociados a lo largo de los próximos 6 meses, llevando a muchos a interpretar la medida como una “confiscación” de facto de activos privados. De hecho Repsol-YPF podría verse forzada a recortar un 8% sus reservas declaradas - y esto después de haber recortado otro 25% a principios de año-.

El gobierno de Morales decretó que los términos contractuales con las compañías energéticas extranjeras tendrían que ser renegociados a lo largo de los próximos 6 meses, llevando a muchos a interpretar la medida como una "confiscación" de facto de activos privados. De hecho Repsol-YPF podría verse forzada a recortar un 8% sus reservas declaradas - y esto después de haber recortado otro 25% a principios de año-

Además, en la reciente Cumbre UE-América Latina celebrada en Viena, Morales anunció que la exigencia de algunas empresas extranjeras de ser compensadas por la nacionalización (o “confiscación”) no se llevará a cabo y lanzó una retórica particularmente agresiva a Petrobras, la empresa estatal brasileña y el inversor más grande en el sector de hidrocarburos en Bolivia. El impacto de estos roces entre Bolivia y Brasil sobre los planes de Chávez de incorporar a Bolivia en el proyecto del “gran gasoducto del Sur” todavía está abierto.

Perú y el “gran anillo de gas”

Los cambios políticos en Bolivia tenían el efecto de relocalizar el interés de los países del Cono Sur en Perú y el “gran anillo de gas” de Sudamérica. Este proyecto alternativo fue anunciado en junio de 2005 –justo después de la adopción de la nueva ley boliviana– por los países de MERCOSUR. Incluye un nuevo gasoducto para llevar el gas desde el gran campo peruano de Camisea a través de los Andes a Chile, donde enlazaría con la red de gasoductos de Brasil y Argentina, suministrando gas a todos los países del sur del continente. Este “gran anillo” implicaría una inversión de por lo menos 2.000 millones de dólares y, de llevarse a cabo, sería un gran paso hacia adelante en la

integración energética del Cono Sur y la resolución de su crisis gasista.

Pero el “gran anillo de gas” ha estado rodeado de dudas y problemas casi desde su anuncio. Primero, aunque las reservas de Camisea son considerables (unos 187.000 millones de metros cúbicos de gas), la nueva demanda de gas licuado en México y EEUU está compitiendo directamente con los países del continente por el gas peruano y poniendo en duda la capacidad de Camisea de suministrar tanto a los mercados del norte como a los del sur. Sin incluir el gas de Bolivia –que tiene un fuerte conflicto diplomático con Chile en torno a su acceso al mar–, muchos piensan que el gas de Camisea, por sí solo, no será suficiente para hacer rentable el proyecto del “anillo”. En segundo lugar, un antiguo conflicto entre Chile y Perú sobre la demarcación de la frontera marítima ha irrumpido de repente en las relaciones bilaterales durante el año 2005, poniendo incluso más en duda el futuro del “anillo de gas”. Por último, el candidato nacionalista y populista, Ollanta Humala –quien ha declarado su disposición a considerar un cambio en el marco legal del sector de hidrocarburos, uno de los más abiertos y liberales de la región, por lo menos hasta la fecha– acaba de ganar la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Perú. Si Humala gana la segunda vuelta a principios de junio –un resultado que no habría que descartar– las probabilidades de que siga el modelo de Chávez y Morales son bastante altas.

Además, con las relaciones boliviano-brasileñas rozando una crisis abierta, no está claro en que condiciones Bolivia vendería su gas a Brasil sea cual sea la ruta por la que se exporte - es decir: 1) a través de las redes existentes en la actualidad, 2) a través del posible proyecto del “gran anillo del gas” o 3) a través de un eventual “gran gasoducto del Sur”-.

Venezuela y el gasoducto del sur

Con el gas de Argentina a punto de entrar en declive, con Bolivia envuelto en su propia inseguridad jurídica y Perú enfrentando la incertidumbre de sus elecciones, y con un fuerte rechazo al neoliberalismo recorriendo el continente junto a un nuevo sentimiento nacionalista y populista, todas las esperanzas para aumentar la producción de gas y profundizar en la integración energética de América Latina parecen haberse esfumado. En solo dos años, Argentina, Bolivia y Perú han sido casi eliminados como opciones factibles para suministrar gas a las crecientes economías del Cono Sur. Este desarrollo ha dejado el campo libre para las iniciativas del Gobierno de Chávez. Aprovechando su todavía no consumada totalmente entrada en el MERCOSUR, y buscando una manera de liderar una versión alternativa de integración regional para oponerse al ALCA, Venezuela ha propuesto un nuevo gasoducto continental. Este “gran gasoducto del sur” llevaría, en principio, 150 millones de mc/d a los países del Cono Sur y podría servir de semilla pragmática para la tan anhelada integración económica y política de América del Sur.

Aunque el recorrido de este gasoducto en proyecto no está claro, seguramente pasaría por el nordeste de Brasil para llegar finalmente a Buenos Aires, conectándose con la red argentina existente. Tendría una extensión de aproximadamente 8.000km y costaría alrededor de 20.000 millones de dólares. De todas formas, deberá superar una larga cadena de obstáculos. En primer lugar, la cantidad de inversión necesaria es formidable. De hecho, de todos los proyectos de gasoductos en la zona, el único que ya está en construcción, el gasoducto Gasene, que llevará el gas del sur de Brasil a sus estados del nordeste, está experimentando un aumento de presupuesto importante y varias empresas involucradas han parado sus obras. Parece que solo podría salvarse con una profundización del compromiso original de Sinopec, una de las empresas nacionales de China. Si la experiencia de este proyecto sirve como referencia, es posible que el “gran gasoducto del sur” termine costando incluso más que la suma actualmente estimada, especialmente teniendo en cuenta que es más que probable que el proyecto se enfrente a protestas ecológicas (y posiblemente a algunas indígenas) por su posible entrada en zonas vulnerables del Amazonas.

Inclusive, las mismas dudas respecto a la suficiencia de las reservas peruanas para suministrar el “gran anillo” pueden aplicarse a las reservas venezolanas. Para mantener las tarifas de transporte al mismo nivel que Brasil actualmente paga por el gas boliviano (aunque las tarifas actuales parecen ser obsoletas a la luz de las recientes declaraciones de Morales en Viena), Venezuela tendrá que generar flujos iniciales de por lo menos 30 millones de mc/d. Antes de construir tal gasoducto, Venezuela tendrá que aumentar sus propias reservas de gas. Aunque el país mantiene que sus reservas suman 4,5 billones de metros cúbicos, solo el 10% no está asociado a reservas de petróleo. De todas formas, el Gobierno venezolano también dice que el país va a aumentar su consumo interno en unos 60 millones de mc/d antes de 2012 (para suministrar nuevas plantas eléctricas y de petroquímica). Por otra parte, la estatal PdVSA está construyendo otro gasoducto para conectar su red oriental con el oeste del país, donde hay escasez de gas, y tiene planes para llevar otros 35 millones de mc/d a esta zona dentro de diez años.

Pero el mismo control que el Gobierno de Chávez ha establecido sobre el sector petrolífero lo está imponiendo sobre el gas. En septiembre de 2005, el Gobierno anunció que PdVSA controlaría cualquier construcción nueva de gasoductos y plantas de exportación (incluyendo plantas de gas licuado). Además, el Gobierno ha cambiado recientemente las reglas para calcular los impuestos sobre la producción de gas, aumentándolos efectivamente. Estos cambios han creado nuevas dudas sobre la seguridad jurídica, que amenazan a los dos únicos proyectos que actualmente tiene comprometidos (el proyecto de Chevron en los bloques *offshore* de Deltana, y el proyecto onshore de Repsol YPF y Total de Yucal-Placer).

Otra paradoja es el hecho de que tanto en Venezuela y en Brasil, como en Chile, varios proyectos para construir plantas de gas licuado han sido desplazados por los nuevos planes de gasoductos regionales. Pero estimaciones del sector apuntan a que para distancias mayores a 3.000km es más rentable licuar el gas y exportarlo por vía marítima. Con la posibilidad de que los costes del “gran gasoducto del sur” vayan a seguir aumentando, retorna la posibilidad de que tanto Brasil como Chile vuelvan a sus anteriores planes de apostar por una estrategia de gas licuado. Esta posibilidad genera incluso más incertidumbre. A la luz de los recientes acontecimientos en Bolivia y Viena, una estrategia en favor del gas licuado -tanto para los consumidores como Chile, Brasil y Argentina, como para los posible exportadores futuros como Brasil- parece más atractiva que nunca, si no imprescindible.

Aunque todos los proyectos de gasoductos regionales están plagados de dudas económicas e incertidumbres políticas, tienen una ventaja atractiva, especialmente para los líderes de izquierda y centro-izquierda del MERCOSUR. Tanto el “gran anillo” como el “gran gasoducto del sur” pueden servir como una herramienta eficaz para profundizar en la colaboración e integración regional y dar más sustancia y coherencia al anhelado sueño de una comunidad o unión de América del Sur

El potencial integrador

Aunque todos los proyectos de gasoductos regionales están plagados de dudas económicas e incertidumbres políticas, tienen una ventaja atractiva, especialmente para los líderes de izquierda y centro-izquierda del MERCOSUR. Tanto el “gran anillo” como el “gran gasoducto del sur” pueden servir como una herramienta eficaz para profundizar en la colaboración e integración regional y dar más sustancia y coherencia al anhelado sueño de una comunidad o unión de América del Sur. Dado que hay una creciente coincidencia de gobiernos afines en el continente - a pesar de la diferencia cada vez más clara entre neopopulistas (p.ej Chávez, Morales, Kichner y eventualmente Humala)- y socialdemócratas moderados (como Vázquez, Lula y lo que se esperaría de un García presidente en Perú)- esta posibilidad es cada vez más factible, aunque todavía menos que probable. El momento de hecho es más propicio que nunca: los precios energéticos sigue siendo bastante altos, los gobiernos de la zona coinciden cada vez más políticamente, EEUU parecer haber perdido su interés en la zona, y el rechazo al Consenso de Washington sigue en alza. Estos son los factores clave que explican la nueva actitud agresiva de independencia que están mostrando los gobiernos de la zona,

tanto de los países productores como de los países consumidores.

Por otro lado, muchos observadores políticos habían especulado que un objetivo de los últimos proyectos de gasoductos regionales fue presionar a Bolivia para que moderase sus políticas del sector de hidrocarburos. Ninguno de estos proyectos, hasta la fecha o por lo menos hasta la Cumbre de Iguazú, habían incluido el gas boliviano de forma explícita, planteando la posibilidad de que Bolivia se viese excluida de sus mercados naturales en el Cono Sur. Esta presión podría tener el efecto de moderar las actuaciones del Gobierno de Morales lo que, a su vez, podría mejorar el clima empresarial y mantener un nivel de inversiones adecuado en Bolivia.

Sin embargo, una de las grandes sorpresas de la reciente Cumbre de Iguazú fue la declaración de Chávez de que Bolivia se incorporaría formalmente al proyecto del "gran gasoducto del Sur". Cómo encajaría esto con la retórica de Morales de Viena respecto a Petrobras sigue siendo un misterio.

Implicaciones para Repsol YPF

Esta posible oscilación boliviana entre la moderación y la rigidez en su trato con Brasil y Argentina va a ser muy relevante para Repsol-YPF, que lleva años sustituyendo reservas nuevas en Bolivia por sus reservas en declive en Argentina. Aunque la empresa hispano-argentina declaró a principios de año un importante ajuste a la baja en sus reservas de Bolivia, Argentina y Venezuela (una revisión que ha implicado un 25% de sus reservas totales)-y posiblemente se verá forzada a hacer otro ajuste a la baja a raíz del decreto de Morales del primero de mayo- todavía tiene muchos intereses en estos países. Pase lo que pase, tendrá que lidiar con la incertidumbre existente y mantener un equilibrio muy delicado en sus relaciones con sus gobiernos neopopulistas, especialmente a lo largo de los próximos 6 meses, período en el cual Bolivia renegociará todos sus contratos de gas.

Para bien o para mal, Repsol YPF se encuentra en una situación casi única entre las grandes empresas de hidrocarburos del mundo. La gran concentración de sus reservas está en América Latina, donde de hecho tiene una posición relativamente privilegiada con los gobiernos, particularmente en Venezuela (incluso a pesar del drama reciente), pero sus homólogos en el sector –con las únicas excepciones de las empresas chinas y la gran estatal rusa, Gazprom– están perdiendo interés en América Latina por cuestiones geológicas y de inseguridad jurídica, y poco a poco están abandonando la región. Aunque Repsol YPF tiene planes de diversificar geográficamente sus reservas y otros activos, no va a ser fácil sin un aumento en su flujo de caja desde América Latina.

Conclusiones

Pero es muy posible que a medio plazo la dura realidad a la que se van a enfrentar los productores de gas en la región juegue al favor de la petrolera española. La necesidad primordial de generar inversiones fuertes en producción e infraestructura probablemente va a moderar las actitudes de los Gobiernos de Bolivia y Venezuela (e incluso de Perú si llega a la presidencia Humala) respecto a la inversión privada, pero especialmente sobre Repsol YPF, dada la relación privilegiada de España con estos países. En primer lugar, no debería considerarse -al menos por el momento- la retórica de Morales como algo definitivo y en segundo lugar, Repsol YPF no ha sido señalada verbalmente por Morales como en el caso de Petrobras, lo que puede ser interpretado como una señal alentadora.

Al fin y al cabo sólo Venezuela podría tener la posibilidad de financiar sus inversiones con fondos propios, e incluso allí hay dudas respecto a la capacidad de PdVSA de llevar a cabo todos los proyectos clave sin participación externa. Mientras que es posible que la región experimente en el futuro una participación mayor de las empresas de China y Rusia, no es probable que este fenómeno sea suficiente como para convertir la colaboración de Repsol YPF en algo prescindible para los gobiernos productores de la región.

Por eso, la política exterior del Gobierno español y el comportamiento de Repsol YPF a corto plazo en la zona van a ser críticos para los intereses nacionales de España en América Latina. Es verdad que la región todavía está atravesando un intenso período electoral, pero las grandes piezas del rompecabezas político parecen estar ya en su sitio. Probablemente, Chávez, Lula, Kirchner y Uribe van a renovar sus mandatos. La única novedad podría ser la elección de Humala en Perú y la incertidumbre que se mantiene en Ecuador. De aquí en adelante se abre un período trascendente en la política exterior y empresarial de España en la región.

¿Están los actores españoles a la altura de estos nuevos desafíos llenos de sutilezas y matices? Un jugador astuto, asumiendo un riesgo calculado, diría que sí.

Paul Isbell

Investigador Principal de Economía Internacional, Real Instituto Elcano

La elección presidencial mexicana se mueve en un escenario de incertidumbre respecto al ganador y de tensión. La posibilidad de un triunfo por estrecho margen no sería descartable.

Resumen

La campaña electoral mexicana ha sido inusualmente agresiva, con momentos de tensión, y su resultado es imposible de pronosticar, a poco más de un mes de la elección. Podría ganar tanto el candidato del PAN (Felipe Calderón) como el del PRD (Andrés Manuel López Obrador). En cualquier caso, será una victoria por escaso margen, y eso significa que podría haber agitación e incluso amagos de violencia después de la elección, y que el futuro presidente difícilmente tendrá mayoría suficiente en el Congreso para gobernar sin acuerdos con los demás partidos. El hecho más notorio y que puede tener mayores repercusiones es la caída del PRI a un tercer lugar y su acelerada descomposición.

Análisis

Estrategias de campaña

Ninguna de las campañas ha sido particularmente imaginativa, ninguno de los candidatos ha conseguido articular un discurso propio lo bastante coherente, claro y sólido para ofrecer una imagen reconocible de lo que sería su gobierno. En el papel, la plataforma más completa es la del PRI, la más incoherente y desarticulada, la del PRD, que es básicamente una lista de promesas de muy distinto orden (reducir los sueldos de altos funcionarios, respetar las culturas indígenas y construir un tren de alta velocidad). En la práctica, han dominado los ataques personales y las frases escandalosas, de impacto más inmediato. Los temas importantes que hay sobre la mesa –reorganización del sistema fiscal y financiero, del sistema de pensiones, política energética y legislación laboral– no están en el centro del discurso de los candidatos porque hay en todos ellos una carga simbólica que los hace difíciles de manejar si se tiene la necesidad de capturar un voto masivo, indeciso.

Roberto Madrazo, el representante del PRI, es muy mal candidato y, fuera de lo que conserva de “voto duro”, no ha conseguido ganar apoyo. Es un político de larga trayectoria, fue gobernador de Tabasco y presidente del PRI: un hombre adusto, poco simpático y nada fotogénico, que para muchos representa los vicios más característicos del régimen revolucionario. Sin duda, es un político hábil, que ha logrado sobreponerse a numerosos

Apunte sobre la campaña electoral mexicana de 2006

Los temas importantes que hay sobre la mesa –reorganización del sistema fiscal y financiero, del sistema de pensiones, política energética y legislación laboral– no están en el centro del discurso de los candidatos porque hay en todos ellos una carga simbólica que los hace difíciles de manejar si se tiene la necesidad de capturar un voto masivo, indeciso.

Fernando Escalante Gonzalbo

ataques dentro y fuera de su partido, pero también ha ocasionado escisiones importantes (la más grave, la de los dirigentes del sindicato de maestros). Como es lógico, su mensaje de campaña ha puesto el énfasis en la experiencia y la capacidad para imponer orden, en contraste con la administración notoriamente inexperta, falta de coordinación, del presidente Fox. En lo que se refiere a los temas centrales –las reformas energética, laboral y de telecomunicaciones–, trata de aprovechar la doble herencia del PRI como partido a la vez nacionalista y modernizador; su mensaje ha sido convincente para una parte del empresariado, sin perder la dosis de ambigüedad indispensable para no enajenarse el voto de sindicatos y organizaciones populares.

En el PAN se impuso, contra la voluntad del presidente Fox, la candidatura de Felipe Calderón. Es un político joven, con experiencia sobre todo como parlamentario: un hombre bien formado, correcto, de trato fácil y buena imagen en televisión. Representa al PAN más tradicional: un partido cívico, conservador y católico. Su principal problema en la campaña consiste en cargar con el desgaste del Gobierno actual, tomar distancia respecto al presidente y defender, a la vez, su único éxito indudable, la estabilidad financiera. A su favor tiene una trayectoria política sin ninguna sombra ni acusaciones de malos manejos: resulta creíble la imagen que ha querido ofrecer de sí mismo, como el candidato de “las manos limpias”. Aparte de la denuncia de la corrupción, típica de la tradición panista, ha dedicado buena parte de su campaña a señalar los riesgos de una política de gasto irresponsable, como se supone sería la de López Obrador. En general presenta una postura clara, favorable a la modernización en política energética, fiscal y laboral: la parte más sustantiva de su discurso se refiere a políticas de generación de empleo.

La campaña del PRD, mucho más que las otras, depende estrictamente de la personalidad de su candidato, Andrés Manuel López Obrador, un político experimentado, de larga carrera, primero en el PRI y después en el PRD, y alcalde de la Ciudad de México los últimos cinco años. Es un hombre bromista y dicharachero, que se divierte con los periodistas cuando le dan por su lado, pero que fácilmente se desconcierta e irrita con preguntas incómodas: suele ser campechano, superficial, también irascible e intolerante; se formó como agitador

Ninguna de las campañas ha sido particularmente imaginativa, ninguno de los candidatos ha conseguido articular un discurso propio lo bastante coherente, claro y sólido para ofrecer una imagen reconocible de lo que sería su gobierno

político y su fuerte es la oratoria de mitin, beligerante y simplista. Su personalidad y su retórica inspiran fuertes sentimientos de adhesión y hostilidad. Se presenta sin mucha elaboración como el candidato de “los de abajo”, agresivamente opuesto a “los de arriba”. Sus discursos proponen cambiar radicalmente la política económica, aunque es poco lo que dice en concreto, salvo que pretende aumentar el gasto en obras públicas como recurso para dinamizar la economía; la gente de su equipo, en cambio, en entrevistas y reuniones fuera del país se esfuerza por transmitir la idea de que mantendrá el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal y la estabilidad financiera.

El desgaste del Gobierno

Por primera vez en la historia reciente de México, los tres partidos mayores que compiten por la presidencia tienen también responsabilidades de gobierno: en ayuntamientos, en los estados y en la presidencia. Eso significa que hay, al menos en teoría, criterios para evaluar su desempeño; significa también que tienen recursos públicos para apoyar sus campañas y que pesa sobre todos el factor de “desgaste” de gobierno, de cara a la elección. No obstante, el modo en que pesa ese factor de desgaste es muy distinto en los tres partidos.

El PRI lleva la peor parte, y no es extraño: en la imaginación de la gente, en el lenguaje habitual, sigue siendo el partido “del Gobierno” por antonomasia, y todavía sucede que se hable del PAN y el PRD como “la oposición” (no es infrecuente hablar incluso de “Gobiernos de oposición”). Es el peso de 70 años de régimen revolucionario, cuya imagen —una simplificación derogatoria, no del todo injusta— sigue teniendo eficacia simbólica. El PRI gobierna en 20 de los 32 estados y varios cientos

de ayuntamientos, aparte de ser el partido con mayor número de diputados y senadores (sin mayoría absoluta en ninguna de las cámaras); después de perder la presidencia en 2000 había tenido una recuperación notable, tanto en elecciones locales como en la renovación del Congreso en 2003. En la campaña presidencial, sin embargo, la tendencia no le es favorable. Aparte de llevar un mal candidato, gravita en su contra el desprestigio de varios gobernadores priístas, como los de Puebla, Veracruz y Oaxaca, objeto de escándalos más o menos notorios. Con todo, el saldo de la larga experiencia de gobierno del PRI no es puramente negativo: en la situación actual es sobre todo aprovechable la estabilidad política y la seguridad de los tiempos pasados.

El PAN ocupa la presidencia y su candidato carga directamente con el descrédito del Gobierno federal por el estancamiento económico, el aumento del desempleo, la inseguridad y todas las deficiencias de los sistemas públicos de salud y educación. El desencanto con el “Gobierno del cambio” fue rápido y masivo: el PAN sufrió un retroceso notable en la elección de diputados de 2003. La estrategia del presidente para enfrentar la desaprobación ha consistido en desviar las críticas hacia el Congreso, al que acusa de haberle impedido hacer las reformas necesarias para aumentar los recursos fiscales o impulsar el crecimiento económico: no ha tenido mucho éxito. Pesan también algunos escándalos que implican a familiares del presidente o colaboradores cercanos. A pesar de todo, no parece perfilarse un severo “voto de castigo”; es interesante ver en las encuestas que en general no se aprueba la gestión del Gobierno, pero que la imagen del presidente sigue siendo buena. Todo indica que el electorado tradicional del PAN se mantendrá, aunque pierda una parte de los votos de 2000, básicamente anti-priístas.

El caso del PRD es más complejo. López Obrador es el único candidato que sale directamente de un cargo de gobierno, alcalde de la Ciudad de México, donde vive casi una cuarta parte de la población del país y que ha sido gobernada por el PRD desde 1997. No obstante, aparece como el candidato de oposición. En su discurso no ha habido ningún cambio, 2000 no significó nada porque el PAN es lo mismo que el PRI; de hecho, se refiere a ambos como el PRIAN. El apoyo en la ciudad sigue siendo enorme —su probable sucesor, el candidato del PRD para la alcaldía, no parece tener ninguna dificultad para ganar— pero hay aspectos de su administración que lo hacen vulnerable; consiguió visibilidad nacional durante cinco años ofreciendo ruedas de prensa diarias, a las seis de la mañana, también supo usar el gasto social, aparatosas obras de infraestructura y las políticas municipales para trenzar una sólida red de apoyo que incluye al enorme mercado informal de la ciudad (vendedores ambulantes, taxis irregulares, transpor-

te colectivo e invasores de tierras). Ahora bien, en su contra pesa el endeudamiento de la ciudad, que casi se duplicó durante su gobierno, las suspicacias que genera la falta de transparencia en el gasto, el manejo de esa red de clientelas y varios de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años (que implican a los que fueron secretario de finanzas y secretario particular de López Obrador).

Los problemas de los partidos

Los tres partidos mayores han enfrentado problemas graves en los últimos tiempos. El PAN sigue siendo, como partido, el más sólido; el PRI es el que ha sufrido un mayor deterioro, aunque sigue siendo el único partido con presencia más o menos homogénea en el territorio.

Las dificultades del PRI vienen de lejos: ha padecido una sangría constante de cuadros y militantes desde que se iniciaron las políticas de ajuste de los presidentes De la Madrid (1982-1988) y Salinas de Gortari (1988-1994). A eso se suma el hecho de la pérdida de la presidencia en 2000 y, con ello, muchos recursos para mantener sus clientelas tradicionales. En los últimos años, el deterioro se ha acelerado por tres tipos de problemas. Primero, los conflictos por la selección de candidatos: sin la cantidad de puestos y empleos públicos que garantizaba la presidencia y el gobierno de todos los estados, se hace más difícil contentar a todos los que aspiran a algún cargo (mucho más si no se tiene el poder arbitral del presidente de la república), por eso, la selección de candidatos ha ocasionado en numerosas ocasiones la salida del partido de los precandidatos perdedores, inscritos como candidatos del PRD o del PAN. Segundo, los conflictos por el control del partido: el más importante el que se dio entre el presidente (Roberto Madrazo) y la secretaria general (Elba Esther Gordillo), dirigente del sindicato de maestros; otros más en esa línea han afectado al sindicato de la seguridad social, a los de los burócratas. Tercero, los conflictos propiamente ideológicos entre la línea tradicional, los partidarios de volver al nacionalismo revolucionario, y la línea moderna, reformista, que sobre todo se identifica con el presidente Salinas de Gortari. El resultado es que el partido se ha debilitado, ha perdido muchos cuadros, no ha resuelto el problema de su identidad ideológica y no ha mejorado su imagen. Su voto es mayoritariamente rural, y cada vez más se concentra en el centro y sur del territorio (aunque es competitivo en algunos estados del norte: Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas).

La relación del PAN con el presidente Fox fue siempre problemática: sólo en el último año de gobierno el presidente ha comenzado a incluir en su gabinete a panistas claramente identificados con la línea del partido; aun así, Fox ha preferido

siempre rodearse de quienes le son más adictos personalmente, una pequeña camarilla que no es bien vista por la mayoría de los cuadros del partido. La división básica también viene de lejos: la oposición entre un PAN tradicional —civilista, católico, provinciano, doctrinario— y un PAN más pragmático, empresarial. Se manifestó claramente en la elección interna para designar al candidato presidencial, donde el candidato del presidente

Los tres partidos mayores han enfrentado problemas graves en los últimos tiempos. El PAN sigue siendo, como partido, el más sólido; el PRI es el que ha sufrido un mayor deterioro, aunque sigue siendo el único partido con presencia más o menos homogénea en el territorio

El PRD es el que ha sufrido la mayor transformación, debida básicamente al ascenso de López Obrador. Hay dos factores que explican el cambio. El primero, la importancia decisiva del gobierno de la Ciudad de México para el partido. El segundo, la figura de López Obrador que, desde la alcaldía, logró un prestigio nacional

(Santiago Creel) fue derrotado por Felipe Calderón, que representa al PAN doctrinario, civilista y de raíz provinciana. No obstante, en la selección de los candidatos para otros puestos —gobernadores, diputados, senadores, alcaldes— ha predominado una inclinación pragmática y hasta oportunista, de modo que el PAN lleva como representantes a varios tránsfugas recientes, notables del PRI e incluso del PRD, como su candidato al gobierno de la Ciudad de México (Demetrio Sodi). La mayor fuerza del PAN sigue estando en el Bajío, el norte y el occidente del país, las zonas más desarrolladas (Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California), y en las grandes ciudades. Conserva a sus votantes tradicionales, no ha sufrido ninguna escisión ni la deserción de cuadros, pero su identidad ideológica empieza a resultar borrosa en la medida en que se ha comprometido con la continuidad de políticas definidas por los últimos gobiernos del PRI.

El PRD es el que ha sufrido la mayor transformación, debida básicamente al ascenso de López Obrador. Hay dos factores que explican el cambio. El primero, la importancia decisiva del gobierno

de la Ciudad de México para el partido: para sus finanzas, para conservar clientelas y presencia nacional; eso significa que hoy por hoy quien controla la ciudad controla al partido. El segundo factor es la figura de López Obrador que, desde la alcaldía, logró un prestigio nacional: inició su campaña por la presidencia hace cinco años y durante ese tiempo tuvo los mayores índices de popularidad en las encuestas, de modo que ofrecía la posibilidad real de alcanzar la presidencia desde el PRD. El resultado es que López Obrador ha subordinado completamente al aparato del partido, ha desplazado a Cuauhtémoc Cárdenas, ha colocado a gente de su confianza en los puestos de dirección y ha decidido la integración de las listas de candidatos del PRD con una proporción desmedida de candidatos externos y tránsfugas del PRI.

No es nada probable que cambien las líneas generales de la política económica ni que se modifique la relación con Estados Unidos. En la política continental México no se sumaría a un hipotético eje La Habana-Caracas-La Paz

Algunos de los cuadros más señalados del partido, sobre todo los provenientes de la vieja izquierda, se han marginado o han hecho pública su disidencia (Adolfo Gilly, Marcos Rascón, incluso Cuauhtémoc Cárdenas). En la práctica eso significa que para el PRD todo se juega en la elección presidencial: la victoria implicaría un complicado reparto de puestos entre grupos muy distintos, la derrota podría significar casi una catástrofe, porque el partido ha perdido prácticamente su identidad. Su fuerza está en la Ciudad de México, en Michoacán (el estado de Cárdenas, donde hoy gobierna su hijo) y en algunos estados del sur y el golfo de México (Tabasco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca).

El curso de la campaña, lo que se puede esperar:

El tono de la campaña lo ha definido, sobre todo, el estilo personal del candidato del PRD, López Obrador, y su enfrentamiento con el presidente Fox. López Obrador inició su campaña muy pronto, años antes de ser designado candidato, prácticamente al asumir el gobierno de la ciudad, en 2000. Su estrategia consistió en subrayar su compromiso con “los pobres” y denunciar la continuidad de la política económica entre los últimos gobiernos del PRI y el de Fox. La presencia constante en los medios, con ruedas de prensa diarias, llenas de declaraciones escandalosas, provocadoras, lo situaron muy pronto como el político más conocido y más popular entre los posibles candidatos a la presidencia: encuestas sumamente anticipadas con respecto a la elección de 2006, que comenzaron a

publicarse en la prensa y en los noticieros de televisión desde 2002, fueron el instrumento fundamental de su precampaña. Con un discurso beligerante, simplista, agresivo, se ganó la animadversión de parte de la clase política, empezando por el presidente, y esa hostilidad le sirvió para acreditarse como alternativa real, representante del “verdadero cambio”.

López Obrador utilizó esas encuestas, que lo situaban como favorito, para imponerse en su partido y poner a los demás, PAN y PRI, a la defensiva. Cuando comenzó formalmente la campaña López Obrador podía presentarse como virtual ganador, con 20 puntos de ventaja sobre sus adversarios. Conforme ha avanzado la campaña, y con otros candidatos en competencia, los números en las encuestas han ido cambiando: y sólo podían cambiar en un sentido, marcando un ascenso de los otros candidatos y una caída de López Obrador hasta quedar los tres—Madrazo, Calderón, López—prácticamente empatados, con el PRI ligeramente por debajo. Han contribuido a ese movimiento no sólo las campañas del PRI y el PAN, sino algunos errores de López Obrador: el haber insultado varias veces al presidente o haberse rehusado a asistir al primer debate televisado entre los candidatos. Se ha abusado de las encuestas de opinión, hasta convertirlas en parte del debate político, y la verdad es que la mayoría son bastante dudosas, aparte de que la disparidad de datos del conjunto haga inevitable el escepticismo (un dato: las encuestas publicadas la primera semana de mayo situaban casi todas a Calderón por encima de López Obrador, una con 10 puntos de diferencia, otras con ocho, siete, tres y uno).

Hay dos factores adicionales que han influido sobre el proceso electoral: la presencia de Hugo Chávez y la del EZLN. El presidente venezolano ha estado presente en primer lugar como imagen: para la clase política tradicional, el empresariado y buena parte de los intelectuales que intervienen en los medios Hugo Chávez representa lo peor del pasado latinoamericano; en general, la prensa lo presenta como un político irresponsable, demagogo, autoritario, intolerante. Ha estado presente también, para la opinión mexicana, por una serie de altercados diplomáticos que más de una vez han estado a punto de provocar la ruptura de relaciones. En ese contexto, declaraciones de Chávez en favor de López Obrador y denuncias de un presunto apoyo venezolano al PRD han enrarecido el ambiente político: no se ha demostrado, salvo por conjeturas más o menos verosímiles, la injerencia venezolana, pero tampoco ha habido un deslinde inequívoco del PRD, y eso afecta sin duda a su candidato.

La presencia del EZLN es igualmente compleja, difícil de entender. Al comenzar la campaña electoral el subcomandante Marcos inició una gira por el país para dirigir lo que llamó “la otra campaña”, que se suponía era un recurso de organización y agitación contra el sistema político. En términos prácticos, fue un fracaso: despertó interés sólo en los primeros dos

o tres días. Marcos recorrió buena parte del país con discreta protección de la policía municipal en cada localidad, hablando en mítines de escasa concurrencia y sin ninguna idea clara, salvo que el pueblo va a “derrocar” al próximo presidente, sea quien sea. La estrategia y el sentido de “la otra campaña” cambiaron a principios de mayo, cuando un zafarrancho entre policías y campesinos amotinados en el pueblo de San Salvador Atenco, cerca de la capital, permitió a Marcos declarar que se quedaría en la Ciudad de México hasta que se consiguiese la liberación de los “presos políticos” de Atenco. Ha intervenido desde entonces en varias marchas y manifestaciones en la capital, donde se multiplican los bloqueos de calles y las manifestaciones más o menos violentas. Es un factor de inestabilidad cuyas consecuencias son imposibles de prever. El absurdo de un guerrillero que viaja por el país y vive en la capital, con protección de la policía, y acude a entrevistas en estudios de televisión, pidiendo que respete la ley un Estado al que dice querer derrocar han hecho que pierda casi todo su atractivo. En todo caso, no puede desestimarse la capacidad de los grupos que lo siguen para ocasionar desórdenes.

México no se sumaría a un hipotético eje La Habana-Caracas-La Paz. Por los movimientos migratorios y los volúmenes de inversión e intercambio comercial México forma parte de América del Norte, aunque sea algo difícil de admitir en público.

Fernando Escalante Gonzalbo
*Profesor-Investigador,
Centro de Estudios Internacionales
del Colegio de México*

Conclusiones

No se puede pronosticar el resultado de la elección. Las encuestas, tomadas con toda la precaución que hace falta, indican un empate técnico entre el PAN (Felipe Calderón) y el PRD (López Obrador), con el PRI (Roberto Madrazo) un poco más alejado, seis u ocho puntos por debajo. Eso significa que, salvo un giro inesperado, el ganador lo será por un estrecho margen. El riesgo que han señalado numerosos analistas es que, en el caso de perder, el PRD no reconociera su derrota; no es un miedo gratuito: hay muchas declaraciones de López Obrador y de su equipo denunciando la presunta parcialidad de las autoridades electorales, de los tribunales, de los medios, y hay también la tradición de protestas violentas de grupos afines al PRD. Eso sin contar con la actual agitación del EZLN en la capital.

El riesgo de que haya estallidos de violencia, tras una derrota del PRD, es real e incluso cercano, en la medida en que podrían actuar grupos incontrolados o más cercanos al EZLN que al PRD. No se puede anticipar ni su extensión ni su importancia. Ahora bien: pasado el escollo de la elección (el momento decisivo será la primera quincena de julio) es razonable suponer que cualquiera que sea el presidente se encontrará con un escenario parecido al de los últimos años: con un partido débil, un congreso sin mayoría y una sociedad muy polarizada. Eso implica que no habrá margen para grandes cambios. No es nada probable que cambien las líneas generales de la política económica ni que se modifique la relación con Estados Unidos. En la política continental

Documentos de trabajo y libros publicados

Documentos de trabajo publicados recientemente

BRIE

Undécima oleada del Barómetro del Real Instituto Elcano (BRIE), estudio de la opinión pública española en materia de política exterior, cuyos resultados correspondientes al mes de marzo de 2006 fueron presentados a los medios de comunicación el 18 de abril de 2006.

www.realinstitutoelcano.org/barometro.asp

Perspectivas ante el inicio de las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea

Alejandro Lorca, Miguel Ángel De La Torre, Regina Martínez, Darina Martykánová y Beatriz Muñoz
(3/4/2006)

El 6 de octubre de 2004 el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, presentaba un “Informe Periódico” de dicha Comisión sobre Turquía de excepcional importancia, ya que en él se recomendaba el inicio de negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Desde entonces se han sucedido las tomas de postura sobre la idoneidad de que dicha adhesión se produzca o no

20 Años de España en la Unión Europea (1986-2006)

Autores: Sonia Piedrafita, Federico Steinberg, José Ignacio Torreblanca
(Abril 2006)

En 2006 España celebra el vigésimo aniversario de su adhesión a la -entonces- Comunidad Europea. Con este motivo, y respondiendo a la propuesta del Parlamento Europeo, nace esta publicación, fruto de la colaboración entre el Parlamento Europeo -Oficina en España-, la Comisión Europea- Representación en España- y el Instituto Elcano. El libro tiene como objetivo ofrecer un balance de las transformaciones económicas, sociales y políticas experimentadas por España a raíz de incorporación a las instituciones europeas en 1986 de una forma tanto sencilla, sugerente y accesible para el gran público, como rigurosa en cuanto al manejo de fuentes, datos y cifras. El libro consta de tres partes diferenciadas: la primera dedicada a la modernización económica del país; la segunda centrada en los grandes cambios sociales y demográficos; y la tercera que examina las transformaciones políticas, tanto en el ámbito nacional como internacional. En cada uno de esos tres grandes apartados se han seleccionado los veinte indicadores que mejor reflejan la magnitud e importancia de dichas transformaciones

Panorama Estratégico 2005/2006

Tercera publicación de este tipo realizada conjuntamente por el **Instituto Español de Estudios Estratégicos** y el **Real Instituto Elcano**. El libro consta de nueve capítulos: “Nuevos escenarios, nuevos desafíos: la transformación del horizonte estratégico”, de Paul Isbell y Rickard Sandell; “Las Fuerzas Armadas como elemento relevante de la acción exterior del Estado. Misiones Internacionales”, de Salvador Cuenca; “La Unión Europea en el 2005: crisis interna y déficit de proyección externa”, de José Ignacio Torreblanca y Alicia Sorroza; “Estados Unidos”, de Rafael Calduch; “Magreb” de Carlos Fernández-Arias; “Oriente Medio: transformación y continuismo en una región convulsa”, de Haizam Amirah Fernández y Natalia Sancha; “Irak”, de José Luis Calvo; “Iberoamérica”, de Carlos Malamud y “Asia” de Fernando Delage. Como indica en la introducción el almirante José A. Balbás Otal, coordinador de la publicación, se ha intentado que fuese un panorama aséptico pero “siempre visto desde España, teniendo en cuenta nuestros intereses y nuestras circunstancias geopolíticas, lo que indudablemente influye en todos los análisis”

La Asociación Euromediterránea una década después

Coordinadores: Haizam Amirah Fernández y Richard Youngs
(Octubre de 2005)

Publicado en vísperas de la celebración del décimo aniversario del Proceso de Barcelona, este libro pretende recoger tanto los logros como las carencias de la Asociación Euromediterránea (AEM) en la última década. Es el resultado de un esfuerzo conjunto realizado por la Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior (FRIDE) y el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y recoge trece nuevos ensayos realizados por algunos de los expertos más reputados en relaciones euromediterráneas, que indagan en los distintos ámbitos temáticos de la cooperación en el seno de la AEM, así como en las distintas perspectivas nacionales ante la evolución de la Asociación.

(También disponible en inglés: **The Euro-Mediterranean Partnership: Assessing the First Decade**)

Anuario Asia/Pacífico 2004

El Anuario Asia-Pacífico nace con la voluntad de satisfacer el interés creciente por esta región en España y América Latina, analizando todas estas cuestiones y con el objetivo de cubrir un espacio vacío actualmente entre las publicaciones especializadas en español. Para hacerlo realidad, han unido esfuerzos tres de las instituciones que desde el mundo de la reflexión académica y la promoción cultural más han trabajado para la difusión de Asia-Pacífico en España. **Casa Asia, la Fundación CIDOB y el Real Instituto Elcano** han aportado su experiencia, diversa y complementaria, con la voluntad de que se convierta en una referencia de calidad para todos aquellos interesados en la actualidad de la región.

Iberoamérica. Realidad frente a mito. De Guadalajara 1991 a Salamanca 2005

Con motivo de la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, celebrada los días 14 y 15 de octubre de 2005, el Real Instituto Elcano elaboró: “Iberoamérica: Realidad frente a mito – De Guadalajara 1991 a Salamanca 2005”, publicación que pretende reflejar, a grandes rasgos y en un formato sencillo y de fácil manejo, la evolución política, institucional, social y económica de los países de la Comunidad Iberoamericana en los últimos 25 años. Los cuadros, gráficos y datos que se presentan tienen por objeto convertir esta publicación en una herramienta de trabajo para todos aquellos interesados en la realidad iberoamericana.



ARIs y materiales de interés

ARIS publicados en el mes de abril

El regreso de Libia: entre el cambio y el continuismo

Haizam Amirah Fernández

(17/5/2006)

Apunte sobre la campaña electoral mexicana de 2006

Fernando Escalante Gonzalbo

(17/5/2006)

Elecciones en Israel: en busca de la legitimación del unilateralismo

Isaías Barreñada

(16/5/2006)

El nuevo escenario político israelí

Víctor Manuel Amado Castro

(16/5/2006)

La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus repercusiones sobre la integración regional (1ª parte)

Carlos Malamud

(10/5/2006)

Rusia ante la crisis nuclear iraní

Antonio Sánchez Andrés

(10/5/2006)

La adaptación de los servicios de inteligencia al terrorismo internacional

Antonio Díaz

(8/5/2006)

Ante el final del terrorismo de ETA: lecciones y errores de la experiencia norirlandesa

Rogelio Alonso

(5/5/2006)

El lugar de la lengua española en Israel

Ivonne Lerner

(27/4/2006)

China ante la crisis iraní

Augusto Soto

(24/4/2006)

El gas: una cuestión conflictiva en América Latina

Paul Isbell

(21/4/2006)

Materiales de interés

Plan África 2006 – 2008

Aprobado el 19 de mayo por el Consejo de Ministros, el Plan África 2006 – 2008 tiene por objetivo establecer un nuevo marco de relaciones con África Subsahariana. Se articula en torno a aspectos como el refuerzo de la presencia política española, la regulación de los flujos migratorios, el afianzamiento de la democracia, los derechos humanos, la paz y seguridad en África, la lucha contra la pobreza y agenda de desarrollo, la participación de España en la Estrategia de la UE para el continente, la promoción de los intercambios comerciales y de inversión, y el fortalecimiento de la cooperación cultural y científica
www.realinstitutoelcano.org/materiales.asp

IV Cumbre UE – América Latina y el Caribe. Declaración de Viena

Conclusiones de la cuarta reunión de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, celebrada en la capital austriaca del 11 al 13 de mayo de 2006. El documento recoge las posiciones comunes de ambas partes en aspectos claves como: asociación estratégica birregional, democracia y DDHH, multilateralismo, terrorismo, drogas y delincuencia organizada, medio ambiente, energía, crecimiento y empleo, los acuerdos de asociación y comercio, lucha contra la pobreza, crecimiento y empleo, cooperación para el desarrollo, migraciones y conocimientos compartidos
www.realinstitutoelcano.org/materiales.asp

Una Agenda de los Ciudadanos. Presentando resultados para Europa

Agenda política adoptada por la Comisión Europea, con miras a recuperar la confianza de la población en el proyecto europeo. El documento recoge los mensajes recibidos del Plan D y de los debates nacionales instaurados durante el período de reflexión abierto por los mandatarios europeos durante 2005, a partir de los resultados negativos de los referendos en Francia y Holanda, y es la contribución de la Comisión al próximo Consejo Europeo
www.realinstitutoelcano.org/materiales.asp

Unidos contra el terrorismo: recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo

Informe del Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan, presentado ante la Asamblea General el pasado 2 de mayo, con una serie de propuestas para reforzar la capacidad de las Naciones Unidas en la lucha contra el terrorismo y recomendaciones sobre una estrategia mundial contra el terrorismo basada en cinco puntos: la disuasión de la población en el apoyo al terrorismo, negar a los terroristas el acceso a los medios para llevar a cabo un ataque, impedir la colaboración estatal con terroristas, desarrollar la capacidad de los Estados para derrotar al terrorismo y la defensa de los Derechos Humanos
www.realinstitutoelcano.org/materiales.asp

Actividades realizadas en el mes de mayo

25 y 26 de mayo de 2006

Mesa Redonda Interministerial Contraterrorismo en África Central y Occidental

Organizado por Naciones Unidas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y Real Instituto Elcano, contó con la participación de los Ministros de Asuntos Exteriores y altos cargos de los Ministerios de Justicia de 27 países de África Central y Occidental, que participaron en una mesa redonda con objetivo de favorecer la ratificación e implementación legal de los instrumentos internacionales contra el terrorismo



24 de mayo de 2006

Desayuno con Mouloud Hamrouche

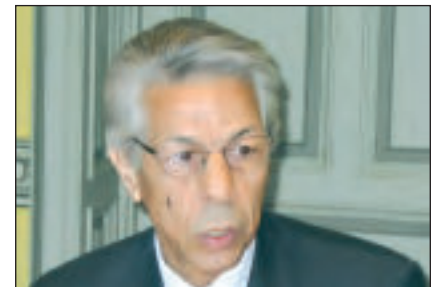
El ex primer ministro argelino, Mouloud Hamrouche, visitó el Instituto para hablar sobre "Seguridad y Democracia"



24 de mayo de 2006

Almuerzo de trabajo con Joseph Weiler

Organizado por el Instituto de Empresa y el Real Instituto Elcano, Joseph Weiler, catedrático de la New York University (NYU), habló sobre el futuro de la Constitución Europea



22 de mayo de 2006

Seminario "La UE y el Mediterráneo: perspectivas de cooperación futura"

Este seminario se celebró en Praga con motivo de la reflexión sobre el Proceso Euromediterráneo. Por la parte española acudieron Fidel Sendagorta, Charles Powell, y Haizam Amirah Fernández



18 y 19 de mayo de 2006

"Ecuador – España en 2006: Hacia una reformulación de sus relaciones bilaterales"

Seminario de dos días de duración organizado por FLACSO-Ecuador y CICODE, con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, la Embajada de España en Ecuador y el Real Instituto Elcano, en el que expertos de ambos países debatieron sobre los aspectos claves de la agenda bilateral entre Ecuador y España: migración, cooperación al desarrollo, comercio e inversión, turismo, cultura y sistemas políticos. Por parte del Instituto Elcano asistieron Carola García-Calvo y Paul Isbell

18 de mayo de 2006

Seminario "España en Afganistán"

Organizado por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Casa Asia y Real Instituto Elcano, numerosas personalidades españolas y afganas analizaron la situación actual en Afganistán y la labor de las tropas españolas en este país. En la inauguración participaron José Antonio Alonso, ministro de Defensa; Miguel Ángel Moratinos, ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Zalmay Aziz, viceministro de Asuntos Exteriores de Afganistán; General Abdul Raheem Wardak, ministro de Defensa de Afganistán; Haneef Atmar, ministro de Educación de Afganistán y Gustavo Suárez Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano. Ion de la Riva, director general de Casa Asia, clausuró el seminario



17 de mayo de 2006

Presentación de "La presencia española en países de fuerte crecimiento: China e India"

Participaron Claudio Boada, presidente del Círculo de Empresarios; Gustavo Suárez Pertierra, presidente del Real Instituto Elcano; Pedro Morenés, Secretario General del Círculo de Empresarios y Pablo Bustelo, uno de los autores. Editada por el Círculo de Empresarios, en la monografía se analizan las grandes posibilidades de futuro y oportunidades que ofrecen estas dos economías emergentes para los inversores españoles.



16 de mayo de 2006

Reunión con la Asociación de Corresponsales Extranjeros

La reunión contó con la participación del Charles Powell, subdirector de Investigación y Análisis; Carlos Malamud, investigador principal de América Latina; y Javier Noya, investigador principal de Imagen Exterior de España y Opinión Pública.



12 de mayo de 2006

Desayuno de trabajo con el Presidente de la Comisión para la Armonización con la UE

Yasar Yakis, presidente de la Comisión para la Armonización con la UE y miembro de la Gran Asamblea Nacional de Turquía en representación del Partido de la Justicia y el Desarrollo, habló sobre las relaciones entre Turquía y la Unión Europea y las posibles contribuciones de su ingreso en la Unión.

10 de mayo de 2006

Desayuno de trabajo con Gabriel Murillo

Gabriel Murillo, profesor titular del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, visitó nuevamente la sede del Instituto para hablar sobre la “Situación política y elecciones en Colombia”.



4 de mayo de 2006

Seminario “España en África Subsahariana”

Seminario organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y Real Instituto Elcano, que con motivo de la redacción del “Plan África”, reunió a representantes de la administración, ONG’s, académicos, e investigadores del Instituto, que debatieron sobre tres temas fundamentales en las relaciones de España con el continente: las relaciones económicas y comerciales, la lucha contra el subdesarrollo, y la emigración.

Actuaron como moderadores Iliana Olivie, investigadora principal de Cooperación y Desarrollo; Paul Isbell, investigador principal de Comercio y Economía Internacional y Rickard Sandell, investigador principal de Demografía y Población del Real Instituto Elcano.



3 de mayo de 2006

Reunión con Genaro Arraigada

Genaro Arraigada, miembro del directorio del Banco del Estado de Chile, habló sobre “La política del petróleo y gas en América Latina”, en una reunión organizada por Secretaría General Iberoamericana y Real Instituto Elcano.



26 de abril de 2006

Desayuno de trabajo con Carolina G. Hernández

Carolina G. Hernández, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad de Filipinas y presidenta del Instituto de Estudios Estratégicos y del Desarrollo (ISDS), visitó el Instituto Elcano, invitada también por Casa Asia, para hablar sobre “Filipinas hoy: Situación política y contexto regional”.

Próximas actividades

14 de junio de 2006

Presentación del libro "El reino del desierto"

En colaboración con la Editorial Aguilar, se presentará este libro sobre Arabia Saudita escrito por la periodista Ángeles Espinosa en la Asociación de la Prensa de Madrid a las 12:30 horas

19 de junio de 2006

Seminario y presentación de publicaciones del área de Cooperación Internacional y Desarrollo del Real Instituto Elcano

Tras la celebración de una mesa redonda, se presentarán tanto el Informe Elcano "Coherencia para el desarrollo: recomendaciones para España en materia económica" como el libro "Más allá de la ayuda. Coherencia de políticas económicas para el desarrollo", coeditado con Ariel. Ambas publicaciones han sido coordinadas por Iliana Olivie, investigadora principal de Cooperación Internacional y Desarrollo,

y Alicia Sorroza, ayudante de investigación del Instituto.

26 de junio de 2006

Seminario sobre Israel

Con motivo del 20º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre España e Israel, la Embajada de Israel en España, el Moshe Dayan Center for Middle Eastern and African Studies (Universidad de Tel Aviv) y Real Instituto Elcano, han organizado este seminario en el que se reunirá a expertos españoles e israelíes para hablar de la situación en Oriente Medio

Patronato

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio de Cultura

BBVA

CEPSA

EADS CASA

Grupo Prisa

IBM

Indra

RENFE

Santander Central Hispano

SGAE

Telefónica

Consejo Asesor Empresarial

Aceralia

Altadis

El Corte Inglés

Iberia

Repsol YPF

Unión Fenosa

El Real Instituto Elcano no comparte necesariamente las opiniones manifestadas en los documentos firmados por sus colaboradores y difundidos en su página web o en cualquier otra publicación del Real Instituto. El Instituto considera que su misión fundamental es servir de foro de discusión y análisis, estimulando el debate y recogiendo opiniones diversas sobre temas de la actualidad internacional, y muy particularmente sobre aquellos que afecten a las relaciones de España y su repercusión en los diferentes ámbitos de la sociedad española.